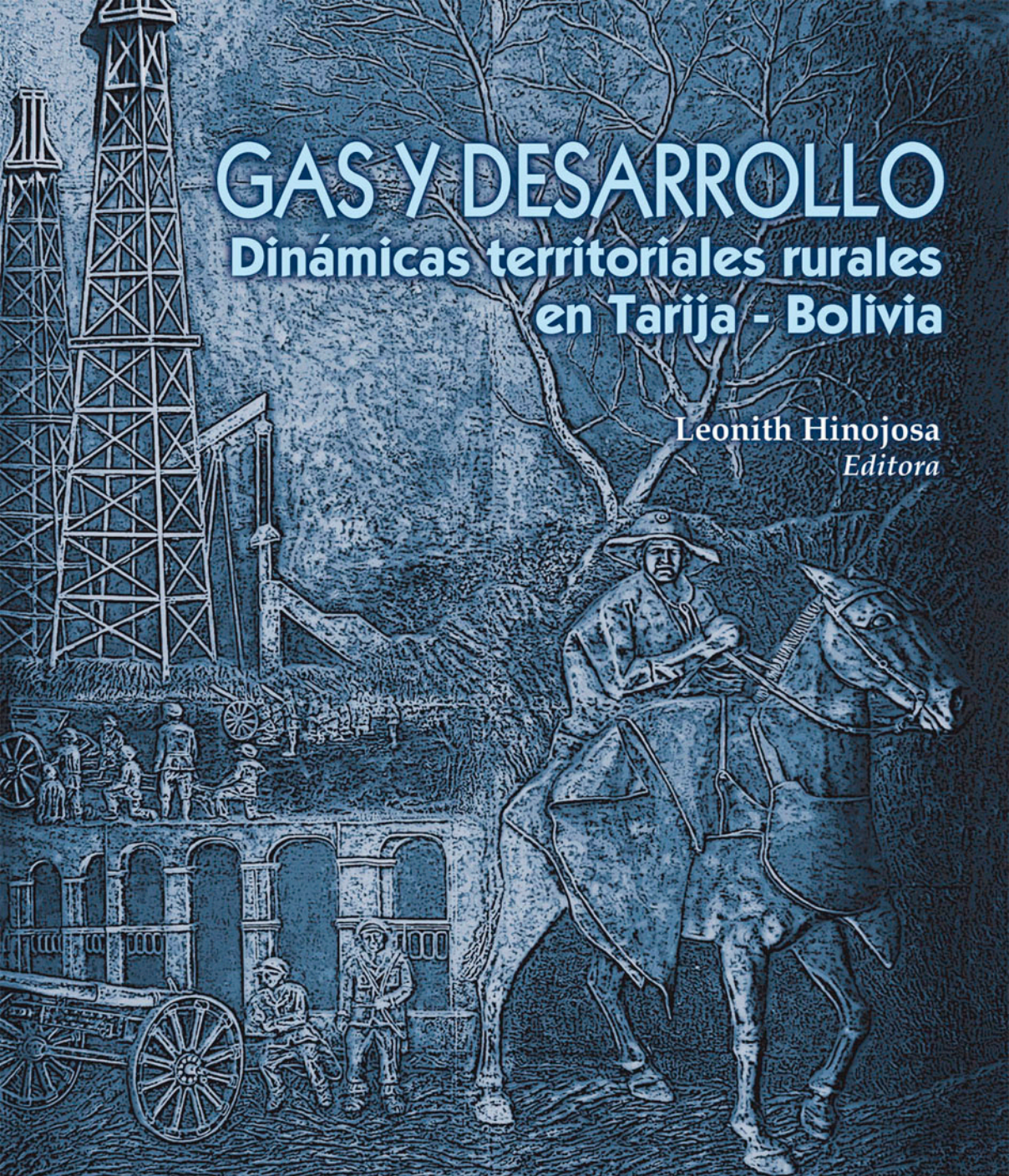


GAS Y DESARROLLO

Dinámicas territoriales rurales en Tarija - Bolivia

Leonith Hinojosa
Editora





Gas y desarrollo

Dinámicas territoriales rurales en Tarija - Bolivia

Leonith Hinojosa
Editora

2012

Esta investigación contó con el apoyo del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) a través del Programa Dinámicas Territoriales Rurales, con el auspicio del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá).

Los límites y nombres mostrados y las designaciones utilizadas en los textos, mapas y gráficos no implican la aceptación o reconocimiento oficial por parte de las autoridades, organizaciones o personas que brindaron la información. Contenidos topográficos de mapas bajo licencia de ESRI Inc.

© Leonith Hinojosa

© Fundación TIERRA

© Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (CERDET)

Fundación TIERRA
Calle Hermanos Manchego N° 2566
La Paz - Bolivia
Telf: (591-2) 243 2263
Fax: (591-2) 211 1216
Email: fundaciontierra@ftierra.org
Sitio web: www.ftierra.org

CERDET
Calle Suipacha N° 290
Tarija - Bolivia
Telf: (591-4) 663 5471
Fax: (591-4) 663 3454
Email:guidodcf@yahoo.com
Sitio web: www.cerdet.org.bo

Edición: Floriana Soria Galvarro

Diseño: Jaime Alvarez Condori

Foto de tapa: Mural H. Alcaldía Municipal de Villamontes

© Fundación TIERRA, 2011

ISBN: 978-99954-770-6-6

Deposito Legal: 4-1-582-12

Impreso en La Paz, Bolivia, febrero 2012

Primera edición: 1000 ejemplares

Impresión:  SCORPION 2460067

Abreviaturas

APG	Asamblea del Pueblo Guaraní
APG-IG	Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu
ASOGAPO	Asociación de Ganaderos de la Provincia O'Connor
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
CCGT	Consejo de Capitanes Guaraníes del departamento de Tarija
CCGTT	Consejo de Capitanes Guaraníes y Tapiete del departamento de Tarija
CEDLA	Centro de Estudios de Desarrollo Laboral y Agrario
CERDET	Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija
CIDOB	Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
CPE	Constitución Política del Estado
DANIDA	Cooperación Danesa para el Desarrollo (Danish International Development Agency)
DTR	Dinámicas Territoriales Rurales
FAM	Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia
FEGACHACO	Federación de Ganaderos de la provincia Gran Chaco
FONDIOC	Fondo para el Desarrollo Indígena-Originario-Campesino
Fundación FAUTAPO	Educación para el desarrollo
Fundación TIERRA	Fundación - Taller de Iniciativas en Estudios Rurales y Reforma Agraria
GNL	Gas natural licuado
IBCE	Instituto Boliviano de Comercio Exterior
ICMM	International Council on Mining and Metals
IDH	Impuesto Directo a los Hidrocarburos
IDRC	International Development Research Centre /Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
IE	Industrias extractivas
IEHD	Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados
INE	Instituto Nacional de Estadística
INRA	Instituto Nacional de Reforma Agraria
LIDEMA	Liga de Defensa del Medio Ambiente
LPP	Ley de Participación Popular
MA	Millenium Ecosystem Assessment (Evaluación de Ecosistemas del Milenio)
MAS	Movimiento Al Socialismo
MBL	Movimiento Bolivia Libre

MDT	Modelo digital del terreno
MNR	Movimiento Nacionalista Revolucionario
MUSEF	Museo de Etnografía y Folklore
NBI	Necesidades básicas insatisfechas
OECD/OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONG	Organización No Gubernamental
ORCAWETA	Organización de Capitanes Weenhayek y Tapiete
OTBs	Organizaciones Territoriales de Base
PDM	Plan de Desarrollo Municipal
PDOT	Plan de Ordenamiento Territorial
PEI	Proyecto Educativo Indígena
PIEB	Programa de Investigación Estratégica en Bolivia
PN	Parque Nacional
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
POA	Plan Operativo Anual
PRONEFA	Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa
PROSOL	Bono Productivo Solidario
PROVISA	Proyecto de irrigación Villamontes – Sachapera
RIMISP	Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
SE	Servicios Ecosistémicos
SED	Escuela de Medio Ambiente y Desarrollo
SEDES	Servicio Departamental de Salud
SERNAP	Servicio Nacional de Áreas Protegidas
SIG	Sistema de Información Geográfica
SNIS	Sistema Nacional de Información de Salud
SUMI	Seguro Universal Materno Infantil
SUSAT	Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija
TCO	Tierra Comunitaria de Origen
TGN	Tesoro General de la Nación
TIOC	Territorio Indígena Originario Campesino
UDAPE	Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas
UU AA	Unidades Agropecuarias
YPFB	Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos
ZONISIG	Proyecto de Zonificación Agroecológica y Establecimiento de una Base de Datos y Red de Sistema de Información Geográfica en Bolivia

Contenido

Reconocimientos	13
Presentación.....	15
Capítulo 1	
Dinámicas territoriales rurales y formación de territorios asociadas a la industria del gas en Tarija, Bolivia.....	21
<i>Leonith Hinojosa, Juan Pablo Chumacero, Guido Cortez, Anthony Bebbington</i>	
1. Introducción	21
2. Marco metodológico y área de estudio	23
3. Marco conceptual para entender dinámicas territoriales rurales en contextos de expansión de industrias extractivas de hidrocarburos.....	26
4. El contexto nacional en que se da la expansión reciente del gas	28
5. Las dinámicas territoriales rurales en Tarija.....	30
Las dinámicas territoriales a partir de la expansión de la explotación del gas.....	31
Las dinámicas económicas rurales en los municipios de Villamontes y Entre Ríos.....	33
6. Principales actores y alianzas y proyectos territoriales	36
El papel de lo urbano	36
Los actores rurales y la formación de coaliciones.....	37
El efecto gas sobre el capital social y el capital político	39
7. Construcción de territorios	41
8. El rol del capital natural en las DTR y la cuestión de la sostenibilidad.....	44
9. Organización del libro	46
Capítulo 2	
Actores y coaliciones de poder en Villamontes y Entre Ríos: una lectura histórica y contemporánea	49
<i>Guido Cortez</i>	
1. Introducción	49
Colonización y ocupación de la frontera chaqueña.....	51
2. Actores sociales y organización sociopolítica en Entre Ríos y Villamontes.....	53
Los pueblos indígenas	53
1) Los guaraníes.....	55
2) Los weenhayek	57
3) Los tapietes.....	59
El sector ganadero	59
El sector campesino.....	62
Los menonitas	64
El sector urbano	64

3. Procesos de cambio socioeconómico y político impulsados por la actividad hidrocarburífera.....	66
Alianzas políticas entre los actores sociales.....	72
4. Conclusiones y recomendaciones	83

Capítulo 3

La formación de territorios asociada a la expansión de la industria del gas en Tarija

*Leonith Hinojosa, Juan Pablo Chumacero, Guido Cortez,
Anthony Bebbington, Denise Humphrey Bebbington*

1. Introducción	91
2. Marco conceptual	93
La formación de territorios y los proyectos territoriales	96
3. La expansión de la industria del gas en Bolivia.....	97
La expansión del sector de hidrocarburos en Tarija	99
4. Efectos territoriales de la expansión de la industria del gas	100
Proyectos territoriales en Tarija	102
Identidades territoriales	106
5. Conclusiones	107

Capítulo 4

Tierra y dinámicas territoriales rurales en Villamontes y Entre Ríos.....

Juan Pablo Chumacero

1. Introducción	111
2. La reforma agraria en Bolivia	112
3. Las actividades agropecuarias en los territorios de Villamontes y Entre Ríos.....	114
4. La desigual estructura de tenencia de la tierra	116
5. El proceso de saneamiento de tierras	118
6. Tierra e identidad	123
7. Hidrocarburos y conflictos territoriales	124
8. Gas, tierra y dinámicas territoriales rurales.....	125
9. Reflexiones finales	127

Capítulo 5

Las tensiones Estado - indígenas debido a la expansión de la industria hidrocarburífera en el chaco boliviano

Denise Humphreys Bebbington

1. Introducción	132
2. Una historia de despojo.....	134
3. Los hidrocarburos en Tarija.....	135
4. Las luchas contemporáneas por la tierra, la auto-gobernanza y el acceso a los recursos financieros	137

Las luchas por la tierra.....	137
La autonomía y la auto-gobernanza	140
Las salvaguardas sociales y ambientales	141
5. Los hidrocarburos en el Parque.....	144
6. Conclusiones	150

Capítulo 6

Articulación entre inversión pública y alianzas territoriales en Villamontes y Entre Ríos..... 153

Juan Pablo Chumacero

1. Introducción	153
2. Inversión pública en la Prefectura de Tarija	154
3. Inversión pública en los gobiernos municipales de Villamontes y Entre Ríos.....	158
4. Coaliciones locales e inversión pública en Villamontes.....	161
5. Coaliciones locales e inversión pública en Entre Ríos.....	164
6. Reflexiones para el debate.....	164

Capítulo 7

Desafiando la maldición de los recursos en Tarija:

pobreza y política social financiada por las rentas de hidrocarburos 171

Leonith Hinojosa

1. Introducción	171
2. Políticas sociales y programas de lucha contra la pobreza en contextos de descentralización fiscal.....	173
3. La descentralización fiscal y las políticas sociales en Bolivia y Tarija.....	176
La descentralización fiscal “de jure” de los ingresos de los hidrocarburos	177
La descentralización fiscal “de facto” al interior de Tarija	180
Iniciativas de política social en Bolivia.....	181
4. Iniciativas de política social en Tarija	183
5. Efectos de las políticas de descentralización intra-regional, políticas sociales y programas contra la pobreza en Tarija	185
6. A manera de conclusión: la (in)sostenibilidad de la política social descentralizada.....	191
La sostenibilidad fiscal.....	191
Sostenibilidad social y política	193

Capítulo 8

Sostenibilidad ambiental y servicios ecosistémicos en contextos

de expansión de industrias extractivas: el caso de las dinámicas

territoriales rurales en Tarija - Bolivia 197

Leonith Hinojosa, Karl Hennermann

1. Introducción	197
2. Base conceptual y metodológica para entender la relación entre capital natural, servicios ecosistémicos y dinámicas territoriales rurales	201

Servicios ecosistémicos	201
Enfoque de estrategias de vida y acceso a capital natural.....	201
Propuesta metodológica para identificar cambios en la relación servicios ecosistémicos y factores ambientales - DTR	203
3. Evaluación del cambio ambiental en contextos de expansión de la industria de hidrocarburos en Tarija, Bolivia.....	210
Impactos de las DTR en el cambio ambiental “medible”	210
Cambios ambientales “percibidos” y conflictos socio-ambientales	220
Análisis cruzado de datos cualitativos y cuantitativos.....	224
4. Sostenibilidad socio-ambiental de la expansión de hidrocarburos y gobernanza del capital natural	226
Gobernanza de los hidrocarburos.....	228
Gobernanza del agua	230
Gobernanza de la tierra	231
5. Conclusiones	232
Capítulo 9	
Conclusiones	237
<i>Leonith Hinojosa, Juan Pablo Chumacero, Guido Cortez, Anthony Bebbington</i>	
Implicancias de política	240
1) Desde el Estado	240
2) Desde las organizaciones de la sociedad civil y la población.....	241
3) Desde las empresas	242
Bibliografía	243

Índice de Cuadros y Anexos

Cuadro 2.1. Cambios en la población urbana y rural entre 1992 y 2010	64
Cuadro 2.2. Elecciones de Ejecutivo Seccional en Villamontes.....	82
Cuadro 4.1. Provincia Gran Chaco: Número y superficie de UU.AA por estratos en 1984	116
Cuadro 4.2. Provincia O'Connor: Número y superficie de UU.AA por estratos en 1984	117
Cuadro 4.3. Superficie que ha entrado al saneamiento, por tipo de propiedad (en hectáreas)	118
Cuadro 6.1. Ejecución financiera de ingresos por fuente de financiamiento (en miles de millones de bolivianos)	156
Cuadro 6.2. Transferencias a gobiernos municipales (en millones de bolivianos)	157
Cuadro 7.1. Iniciativas de política social implementadas por el nivel central y regional de gobierno	184
Cuadro 7.2. Principales indicadores de desarrollo en Tarija, Villamontes y Entre Ríos.....	186
Cuadro 7.3. Resultados de desarrollo a nivel nacional, regional y local.....	188
Cuadro 7.4. Estructura del ingreso de la Prefectura de Tarija (%).....	192
Cuadro 8.1. Activos y factores ambientales para el desarrollo de DTR en contextos de expansión de industrias hidrocarbúrficas.....	204
Cuadro 8.2. Indicadores indirectos de impacto de los recursos financieros de la industria extractiva en el capital natural.....	209
Cuadro 8.3. Percepción de problemas relacionados con la explotación del gas (porcentaje de respuestas respecto del cambio observado desde el año 2000 hacia adelante)	223
Cuadro 8.4. Percepciones sobre el impacto de la explotación de gas en conflictos relacionados a acceso a activos naturales (porcentajes)	225
Anexo 6.1. Ingresos y ejecución de ingresos en Villamontes y Entre Ríos	168
Anexo 8.1. Percepción cualitativa del cambio en activos y factores ambientales en Villamontes y Entre Ríos a partir de la expansión de la industria del gas (a partir del año 2000, en porcentajes)	235

Índice de Gráficos

Gráfico 6.1. Estructura de gastos de inversión en el municipio de Villamontes 2005 - 2008.....	159
Gráfico 6.2. Evolución de gastos de inversión en el municipio de Villamontes 2005 - 2008.....	159
Gráfico 6.3. Estructura de gastos de inversión en el municipio de Entre Ríos 2005 - 2008.....	160

Gráfico 6.4. Evolución de gastos de inversión en el municipio de Entre Ríos 2005 - 2008.....	160
Gráfico 7.1. Distribución del IDH.....	178
Gráfico 7.2. Distribución de Regalías (Ley 3058).....	179
Gráfico 7.3. Distribución del IEHD.....	179
Gráfico 7.4. Principales problemas sociales identificados en la municipalidad de Villamontes.....	185
Gráfico 7.5. Cambios porcentuales en indicadores de educación 2000 - 2009.....	189
Gráfico 7.6. Cambios en indicadores de salud, departamento de Tarija 2000 - 2009.....	189
Gráfico 7.7. Cambios en indicadores de salud, Villamontes, 2000 - 2009.....	190
Gráfico 7.8. Cambios en indicadores de salud, Entre Ríos, 2000 - 2009.....	190
Gráfico 8.1. Modelo de evaluación de factores y activos ambientales.....	207
Gráfico 8.2. Estimación del cambio temporal en factores y activos ambientales.....	208
Gráfico 8.3. Estimación del cambio ambiental global.....	208
Gráfico 8.4. Percepción cualitativa del cambio en activos y factores ambientales en Villamontes y Entre Ríos a partir de la expansión de la industria del gas (2000 hacia adelante).....	222
Gráfico 8.5. Calidad ambiental global en 2001 y 2008 (índice global, ponderado por <i>stakeholders</i>).....	226

Índice de Mapas

Mapa 1.1. Departamento de Tarija, Bolivia.....	24
Mapa 2.1. Departamento de Tarija con misiones franciscanas fundadas en el siglo XVII y XIX y demandas territoriales indígenas actuales.....	50
Mapa 3.1. El departamento de Tarija y la nueva región El Chaco.....	101
Mapa 4.1. Avance del saneamiento de tierras por municipio.....	119
Mapa 4.2. Tarija: TCO en los municipios de Villamontes y Entre Ríos.....	121
Mapa 4.3. Avance del saneamiento de tierras por municipio, TCO, oleoductos y gasoductos.....	122
Mapa 5.1. Áreas de desarrollo hidrocarburífero actual y potencial, 2009.....	139
Mapa 8.1. Cambio en disponibilidad de agua, 2001 - 2008.....	213
Mapa 8.2. Cambio en el acceso a agua, 2001 - 2008.....	214
Mapa 8.3. Cambio en acceso a red vial, 2001 - 2008.....	216
Mapa 8.4. Cambio de aptitud agropecuaria, 2001- 2008.....	218
Mapa 8.5. Recursos hidrocarburíferos, 2008.....	221
Mapa 8.6. Cambio de calidad ambiental, 2001 - 2008 ponderado por entrevistados.....	227

Los autores

Leonith Hinojosa (editora)

PhD, Universidad de Manchester. Investigadora en el Departamento de Geografía de la Open University y asociada a la Escuela de Medio Ambiente y Desarrollo y el Brooks World Poverty Institute de la Universidad de Manchester. Economista de formación, estudia y publica sobre temas de economía del desarrollo y geografía económica. Su trabajo reciente de investigación, con énfasis en países andinos, incluye la economía política de estrategias de desarrollo basadas en industrias extractivas, agua y minería, pobreza y políticas sociales, y formación de mercados en áreas rurales. Otra área de su trabajo es la evaluación de impacto de acuerdos de libre comercio y de proyectos de desarrollo.

Anthony Bebbington

Higgins Profesor de Ambiente y Sociedad y Director, Escuela de Postgrados en Geografía, Clark University, EEUU; Asociado Profesorial de la Universidad de Manchester; Investigador Asociado del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES); Profesorial del Concejo de Investigaciones Económicas y Sociales del gobierno británico (2007-2010). Fue elegido como miembro de la Academia de las Ciencias Nacionales de los EEUU (2009). Formado como geógrafo, su trabajo se enfoca en: estrategias de vida y pobreza rural; ONG y movimientos sociales; e industrias extractivas, conflictos sociales y desarrollo territorial. Sus libros en castellano incluyen: *Minería, Movimientos Sociales y Respuestas Campesinas* (2007/2011, IEP/CEPES); *Los Movimientos Sociales y la Política de la Pobreza* (2011, IEP/CEPES/GPC, A. Bebbington, M. Scurrah, C. Bielich); *Minería y Desarrollo en el Perú* (2007, IEP/PSG/Oxfam/CIPCA, y otros); *El Capital Social en los Andes* (2001 Abya Yala, con VH Torres); y *Los Actores de Una Década Ganada* (1992, Abya Yala, con G. Ramón y otros).

Denise Humphreys Bebbington

Profesora Asistente de Investigación para el Instituto de Desarrollo, Comunidad y Medio Ambiente y Directora para el Programa de Género y Estudios sobre la Mujer, Clark University (EEUU), e Investigadora afiliada al Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (CERDET). Anteriormente se desempeñó como Coordinadora para el Programa América Latina del Global Greengrants Fund, Representante para el Perú para la Fundación Interamericana y Subdirectora para la

región Sudamérica para Catholic Relief Services. Su trabajo explora la expansión de las industrias extractivas y el desarrollo de la gran infraestructura en América del Sur, las respuestas de las organizaciones del movimiento socio-ambiental, y la ecológica política de los hidrocarburos en Tarija, Bolivia. Ha publicado en *Latin American Perspectives*, *World Development*, *Development and Change*, *New Political Economy* entre otros.

Guido Cortez Franco

Licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires UBA, Argentina. Fue investigador junior del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), en el año 1997. Es Director del Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (CERDET) desde el año 2005, institución que acompaña a organizaciones indígenas del chaco tarijeño en la recuperación de tierras tradicionales y en la ejecución de proyectos productivos. Diplomado en Pedagogía 2010.

Juan Pablo Chumacero Ruiz

Licenciado en Economía y Magister en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Andina Simón Bolívar - Ecuador (en proceso de defensa de tesis). Trabaja en la Fundación TIERRA en Bolivia desde el año 2000. Fue director de la oficina regional Valles en Chuquisaca durante 2006-2007 y actualmente es responsable de la Unidad de Investigación a nivel nacional. Su trabajo de investigación está referido a temas como tenencia y acceso a la tierra, derechos indígenas, desarrollo rural y seguridad alimentaria. Entre sus investigaciones recientes se cuentan: *Trece años de reforma agraria en Bolivia. Avances, dificultades y perspectivas*; *Conflicto por la tierra en comunidades aymaras, quechuas y chiquitanas en Bolivia*; *Mapeo y estado de situación de los territorios indígena originario campesinos en Bolivia*; y *Mujeres rurales, acceso y control sobre la tierra en comunidades indígenas campesinas*.

Karl Hennermann

Diplomado en Geografía (Universidad de Regensburg) y Master en Business Research (Universidad de Munich). Experto en SIG y tecnología geoespacial con 20 años de experiencia. Trabaja en el área de informática geoespacial con aplicaciones a la planificación y gestión medioambiental, desde la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Como voluntario en MapAction, su trabajo es en SIG para la gestión de ayuda humanitaria y de emergencias. Ha sido también profesor e investigador en la Universidad de Munich y consultor en informática e información geográfica. Sus publicaciones incluyen el renombrado libro *Kartographie und GIS* y diversos artículos en revistas científicas.

Reconocimientos

Este libro es resultado del proyecto de investigación en Dinámicas Territoriales Rurales en Bolivia llevado a cabo por la Universidad de Manchester, la Fundación TIERRA y el Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (CERDET), en colaboración con el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) y su programa sobre Dinámicas Territoriales Rurales (DTR) en América Latina (www.rimisp.org/dtr). El proyecto DTR en Bolivia fue coordinado por Leonith Hinojosa con el apoyo de Anthony Bebbington. El equipo de investigadores estuvo integrado por Juan Pablo Chumacero y Guido Cortez. Karl Hennermann es coautor del capítulo ambiental y participó en el diseño y análisis SIG en la investigación. Denise Humphreys Bebbington estuvo relacionada al equipo DTR a través de su investigación doctoral dentro del programa de investigación Territorio, Conflictos y Desarrollo en los Andes (TCD-Andes) desarrollado en la Universidad de Manchester (www.sed.manchester.ac.uk/research/andes/es). El programa TCD-Andes, coordinado por Anthony Bebbington y financiado por el Consejo de Investigaciones Económicas y Sociales del Reino Unido (RES-051-27-0191), investigó las relaciones entre las industrias extractivas, dinámicas territoriales y tendencias de desarrollo en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia; y dentro de la Universidad de Manchester generó bases para la presente investigación.

Nuestro trabajo no hubiera sido posible sin la apertura y colaboración de actores clave en el Gobierno Regional de Tarija, en los municipios de Villamontes y Entre Ríos, en la oficina de Tarija de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en varias de las empresas de hidrocarburos que operan en el chaco, en las ONG de Villamontes y Entre Ríos y, sobre todo, en las organizaciones indígenas de los pueblos Weenhayek, Guaraníes y Tapiete y las organizaciones comunitarias de ganaderos y campesinos de Villamontes y Entre Ríos. Para todos ellos va nuestro mayor agradecimiento. En el trabajo de campo contamos con el valioso apoyo de Juan Carlos Llanos, Yenny Herrera, Martha Cruz y del equipo de CERDET, a ellos les quedamos muy reconocidos. Agradecemos con deferencia los valiosos comentarios de Miguel Urioste y Miguel Castro sobre el manuscrito, y de Félix Modrego y Daniela Acuña sobre capí-

tulos individuales. Gracias también a Floriana Soria Galvarro y Diego Olivera por su apoyo editorial.

Finalmente, nuestro especial agradecimiento es a RIMISP por su continua confianza y apoyo a nuestro proyecto, y al International Development Research Centre (IDRC) que financia el programa DTR; con ellos y el conjunto de socios que conforman el programa compartimos la gran satisfacción de ser parte de la red DTR en Latinoamérica y la aspiración de que nuestro trabajo contribuya a la generación de dinámicas territoriales que conduzcan a un crecimiento inclusivo y sustentable.

Leonith Hinojosa

Presentación

En mi disciplina –la Geografía– el estudio de las regiones y los territorios tiene una larga historia, con raíces tanto europeas como americanas. Dicho sea de paso, esta tradición regionalista no ha sido siempre feliz, y en diferentes momentos ha sido criticada por ser conservadora, descriptiva, sin teoría y sin metodología rigurosa. Sin embargo, el afán de entender tanto el carácter de la región como la producción de estructuras espaciales persiste, no solo en el ámbito académico sino también en las esferas más populares. Muchas veces, por ejemplo, los políticos regionalistas invocan el “espíritu regional,” los “intereses” de las regiones hasta el “destino” de la región. Inclusive los libros de turismo toman por dado que existen regiones que se llaman “el Chaco,” “los Yungas” etc. y que, por sus características especiales, deben ser objeto de interés turístico. Y obviamente esto no se da solamente en Bolivia: en los otros países andinos se invocan muchas supuestas identidades y esencias regionales –la cajamarquina, la cuzqueña, la cuencana, la antioqueña, etc.– Con frecuencia, estas invocaciones pasan desapercibidas, pero vale la pena sujetar estas constataciones a un poco más de escrutinio y preguntar ¿en qué sentido realmente existen estas regiones? Y si es que decidimos que existen, ¿hasta qué punto son las identidades y características que las definen estables y estáticas, o existen más bien en procesos de cambio permanente?

Me parece que estas preguntas son válidas para presentar este libro por tres razones que quiero comentar aquí (hay otras razones también). Primero, llámense regiones u otra cosa, muchos espacios no-metropolitanos en los países andinos están experimentando procesos de transformación profunda a raíz de la expansión y la intensificación de las industrias extractivas y los procesos político-económicos que acompañan esta expansión. Dicho de otra manera más coloquial, el Cajamarca (Perú) de hoy (anfitrión de la mina de oro más grande de América Latina, mas varios otros proyectos mineros nuevos y grandes) no es el Cajamarca de hace dos décadas, el día-al-día de Cotacachi-Intag (Ecuador) ha sido cambiado por los conflictos mineros de los últimos veinte años, y el Tarija actual tiene un sentido bastante distinto al Tarija de los años 90. El surgimiento de la nueva economía extractiva ha cambiado muchos espacios latinoamericanos de manera importante y quizá para siempre.

Segundo, en los conflictos sobre la extracción, los discursos políticos hacen mucho uso del concepto de región, sea cuando los actores se definen como movimientos regionales, sea cuando las demandas que se hacen se enmarcan como demandas “regionales”. Hace algunos años, por ejemplo, dirigentes y manifestantes en Tacna y Moquegua en el sur del Perú invocaron derechos regionales para insistir en su debida porción de los ingresos fiscales producidos por la minería. En Tarija también se ha escuchado el argumento de que “a la región le toque su porcentaje” y que además este porcentaje debe ser alto. Este lenguaje regionalizado tiene muchas consecuencias, entre otras cosas sugiere que la relación política que define el uso y el control de las rentas extractivas debe definirse en términos espaciales (nación-región), en contraste con otros discursos que más bien insisten en la centralidad de la relación Estado-ciudadano; un lenguaje completamente distinto (y con consecuencias muy distintas) para pensar la gobernanza de la extracción.

Tercero, el libro muy conscientemente hace uso del término “territorio” y no “región”. Este no es el sitio para entrar en una discusión amplia sobre las convergencias y divergencias entre los dos conceptos, o sobre las sutilezas del concepto “territorio” (para estos temas ver, por ejemplo, los libros de José Bengoa 2007 y Robert Sack 1986). Sin embargo, quiero usar los dos términos para reflexionar sobre otro tema, el control y la gobernanza del espacio. En un contexto como el boliviano, el término territorio inmediatamente sugiere la figura del territorio indígena. Mientras estos territorios son espacios con identidades e historias, también implican la existencia de institucionalidades indígenas para gobernar este territorio dentro del espacio mayor del Estado-nación (o Estado-plurinación). Y como recién me comentó el historiador ecuatoriano, Pablo Ospina, esta noción de la gobernanza también está presente en ciertos conceptos de la región. Para él, la palabra “región” invoca la noción del *rex* controlando un espacio. Las transformaciones regionales y territoriales son, por lo tanto, también transformaciones en los regímenes de gobernanza. La expansión de la economía de extracción en estos espacios es, entonces, un proceso que re-estructura la gobernanza y transforma las formas de control del espacio. Bajo esta lectura, las empresas extractivas son mucho más que agentes económicos en las dinámicas territoriales, son sujetos políticos reescribiendo sistemas de gobernanza.

Este libro tiene relevancia para estos diferentes debates (más otros). El libro sugiere una manera especialmente fructífera para entender y estudiar una región, y en este sentido intenta ser un aporte a la tradición regionalista en la geografía. También presume la existencia de regiones y territorios, pero los entiende como construcciones sociales, fenómenos inestables producidos por un conjunto de factores sociales y materiales y que pueden cambiarse en la medida en que estos factores también cambian. El libro nos demuestra que para entender la construc-

ción de Tarija, del chaco, de los territorios indígenas o de los territorios del gas, hay que analizarlos en términos de los distintos “proyectos territoriales” de diferentes actores, de las coaliciones sociales que terminan definiendo los proyectos regionales más poderosos, de las dinámicas catalizadas por la nueva economía del gas, de las formas de intervención del Estado central y del capital privado, de las interacciones entre la economía política y el ambiente, etc. O sea, nos sugiere una manera para pensar la producción del espacio.

Frente a la movilización discursiva de las ideas de “región” o “territorio” en las disputas sobre el gas y el control de sus rentas, el libro cuestiona la facilidad con que muchas veces se invocan estos referentes espaciales como si fueran actores sociales obvios. El análisis del libro demuestra con mucha claridad que no hay un solo proyecto regional o territorial. Existen, más bien, varios proyectos a veces en disputa, a veces avanzan paralelamente. Estos proyectos son construidos por actores y coaliciones sociales y siempre privilegian ciertos intereses y marginalizan otros. La implicación es que nunca hay que confiar en los discursos que invocan *el* interés de *la* región.

En su fondo, el libro es una narración analítica de la transformación de una región, y como tal abre otras líneas de reflexión también. La transformación que narra es el resultado del crecimiento significativo de una economía de extracción de hidrocarburos. Ahora bien, se puede analizar la problemática de esta transformación en términos normativos, plantearla como un problema de “desarrollo,” y preguntar si ¿se redujo la pobreza?, ¿creció el PIB?, ¿se construyó infraestructura?, ¿fue sostenible?, etc. De hecho algunos de los capítulos del libro construyen sus argumentos en estos términos. Estas discusiones son importantes y hemos participado en ellas en otros artículos (ej. Bebbington *et al.* 2009 en *Debate Agrario*). Sin embargo, me parece igualmente útil plantear la discusión en términos de transformaciones. Algunas de las transformaciones de las cuales este libro habla incluyen: la distribución y disponibilidad de rentas fiscales; las relaciones sociales y las economías locales dentro de los territorios y las organizaciones weenhayek y guaraní; los gastos y los programas sociales del gobierno departamental y nacional; los mismos procesos de construcción territorial y formación de actores y coaliciones sociales; las relaciones entre el chaco tarijeño y otros espacios del departamento;... Se podría haber hablado de otras transformaciones también: de imaginarios del futuro entre una gama de actores sociales, desde las familias indígenas hasta las autoridades estatales; de la vida diaria al lado de los caminos que van hacia los campos petroleros; de la arquitectura urbana de Caraparí y Villamontes con los palacios municipales y nuevos mercados municipales; y otros. El punto es que mucho, mucho ha cambiado, y los cambios han sido profundos. Y aunque el gas no es el único motor de cambio en Tarija –las economías vitícola,

soyera y turística también se han dinamizado— sería difícil pretender que el eje de las transformaciones descritas en este libro no haya sido la economía del gas.

Esto nos plantea otro tipo de pregunta menos desarrollada en el libro, salvo en un capítulo. Esta pregunta es ¿qué implica toda esta transformación para la democracia, tanto para la democracia en general como para la democracia en el tipo de Estado perfilado por la nueva Constitución Política del Estado boliviano? Si un cambio en la estructura productiva de una región produce transformaciones de tanta envergadura, ¿estas transformaciones deberían ser objeto de debate político antes y durante estos procesos de transformación?, ¿hasta qué punto? Obviamente no es posible debatir toda transformación con anticipación simplemente porque no se sabe que va a pasar hasta que se dé en la práctica. Sin embargo, la experiencia comparativa e internacional ahora es tal que hubiera sido razonable anticipar ciertos de los cambios profundos que se han dado en Tarija. Sin embargo, da la sensación que los cambios se dieron sin el debate político anticipado que su envergadura merecía. Aunque hubo discusiones en base al estudio del PNUD sobre “La economía más allá del gas” y ciertas mesas de concertación, la mayor parte del debate parece haberse dado en el camino, una suerte de respuesta adaptativa a una historia ya narrada, pero al inicio del proceso de expansión de la industria hizo falta más discusión abierta sobre qué tipo de Tarija se quería construir, cuáles tipos de transformación se querían promover y cuáles no. En términos más tecnocráticos, no hubo un plan previo concertado y debatido para manejar las transformaciones que se les venían a los pobladores del departamento.

Estos antecedentes plantean un desafío para el futuro, y por lo tanto un interrogante para la democracia plurinacional del Estado boliviano. Suponiendo que vienen más transformaciones a consecuencia de los nuevos proyectos hidrocarbúricos que se quiere promover además de las grandes inversiones en infraestructura que acompañarán este proceso, ¿se dará —y cómo se dará— un debate público y político sobre el tipo de región que se quiere crear sobre la base de los nuevos proyectos de gas?, ¿cómo quieren que sean las relaciones sociales, las relaciones inter-étnicas y las relaciones económicas en esta nueva región?, ¿qué tipo de ambiente cotidiano es el que se quiere vivir día-al-día?, ¿cómo será la relación entre la población y el Estado, como será el agua...? Las respuestas a estas preguntas dependerán mucho de quienes participan en los debates y a quienes los gobiernos intentan empoderar y a quienes excluir. Uno pensaría que en la medida en que el debate sea más incluyente y menos asimétrico, y en la medida en que el gobierno (aunque tenga su posición preferida) facilite un proceso que busque convergencias entre las visiones de diferentes actores sociales, los resultados serán más estables y más políticamente viables.

Se espera que este libro aporte información de utilidad para estos debates. Los capítulos se basan en un sostenido trabajo de campo (de todos), combinado con trabajos cuantitativos (de Leonith Hinojosa y Juan Pablo Chumacero) y la experiencia acumulada de dos décadas de trabajo con poblaciones indígenas y campesinos en el chaco de Tarija (Guido Cortez).

Esperamos que esta combinación de diferentes maneras de producir el conocimiento, junto con la integración disciplinaria (economía, estudios para el desarrollo, geografía, sociología), otorgue una cierta legitimidad a los argumentos elaborados. Los argumentos son, sin embargo, nada más que un insumo al debate público pendiente sobre el futuro Tarija que se quiere construir sobre la base de su sub-suelo. En la medida en que este debate sirva para construir una coalición social amplia con un proyecto territorial compartido, se estará acercando a un contexto en el cual se va a poder hablar, legítimamente, de intereses y demandas regionales. Dicho de otra manera, y volviendo al inicio del prólogo, la región incluyente solamente se produce a través del debate político en la esfera pública. La gran tarea para Bolivia es asegurar que la misma economía política de extracción no socave esta esfera pública.

Anthony Bebbington

Capítulo 1

Dinámicas territoriales rurales y formación de territorios asociadas a la industria del gas en Tarija, Bolivia

Leonith Hinojosa, Juan Pablo Chumacero, Guido Cortez, Anthony Bebbington

1. Introducción

¿Cómo se hace desarrollo territorial rural?, ¿Qué explica que unos territorios sean dinámicos mientras otros queden rezagados?, ¿Qué tipo de acción pública conduce a que las dinámicas sean exitosas? En los estudios de desarrollo y en la práctica de la política pública estas han sido algunas de las preguntas centrales a las que académicos, políticos, activistas de la sociedad civil y los propios actores del espacio rural han buscado responder. Son también las preguntas que motivan el programa Dinámicas Territoriales Rurales (RIMISP 2007) a cuyas respuestas el proyecto DTR en Bolivia busca contribuir.

En esa búsqueda de entender el porqué del éxito y qué explica la diferenciación se han identificado factores que tienen que ver con la base económica (la idea del crecimiento y la productividad); con la base ambiental (las particularidades físicas del capital natural y su capacidad de generar servicios ecosistémicos); con las estructuras organizativas e institucionales (el capital social); con las estructuras de poder y el contexto político (la economía política del desarrollo); y con las interrelaciones entre actores y espacios.

Si el “éxito” de un territorio se define como “un ciclo virtuoso localizado de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental” (RIMISP 2007a), para estudiarlo dentro del contexto de estrategias de desarrollo basadas en la expansión de industrias extractivas en Bolivia, hay en el concepto de Dinámica

Territorial Rural (DTR) tres elementos que requieren cierta definición. Estos conceptos son: dinámica territorial, territorio y espacio rural.

Dinámica territorial. Se refiere al proceso de cambio continuo orientado a una triple condición de crecimiento, inclusión y sostenibilidad ambiental.

Territorio. Un territorio es definido como “un espacio rural con una identidad construida socialmente, la cual incluye un marco institucional y un conjunto de agentes sociales” (Schejtman y Berdegué 2004). Esta definición sugiere que, respecto a otros conceptos de análisis del espacio (por ejemplo, la región), lo territorial se centra en un espacio físico geográfico que contiene a actores que mediante instituciones localizan sus espacios de poder.

Lo Rural. Lo rural hace alusión a características particulares del territorio donde los recursos naturales –que son transformados en capital natural y servicios ecosistémicos– constituyen la base del dinamismo. Pero también lo rural es un espacio que sugiere un paisaje particular y donde el desarrollo de estrategias de vida de los pobladores rurales combina un sentido utilitario del capital natural con uno simbólico del paisaje rural.

Por lo tanto, entender cómo se dan las DTR, implica entender cómo los procesos de cambio económico transforman territorios y las ideas (los imaginarios) sobre lo rural.

En espacios rurales donde los recursos naturales incluyen riqueza mineral (metales e hidrocarburos como el gas y el petróleo) y el potencial de esa riqueza coloca a las inversiones de gran escala en el centro de una estrategia de desarrollo que sobrepasa lo rural, el proceso de cambio en los territorios rurales rebasa sus límites y, al mismo tiempo, ubica a lo rural en el centro de procesos de cambio supraterritoriales (i.e. regionales, nacionales, internacionales). Esto requiere, entonces, analizar escalas y relaciones espaciales.

El estudio de las DTR en contextos de riqueza mineral busca aportar al debate sobre “cómo se hace desarrollo rural” mediante el análisis de las siguientes relaciones: i) la relación entre la riqueza mineral y las dinámicas económicas y sociales que se dan dentro de los territorios ricos en recursos minerales; ii) la relación entre actores que interactúan en torno a la riqueza mineral; iii) la relación entre la expansión de industrias extractivas y la formación de territorios. Nuestra investigación en Bolivia, el segundo país más importante en reservas gasíferas en Latinoamérica, ha estudiado estas relaciones a partir de las siguientes hipótesis orientadoras:

Primero. Las DTR se transforman como resultado de un efecto combinado del establecimiento de industria extractiva en el espacio rural y de la acción del Estado que se habilita a partir de la captura de renta de los sectores extractivos.

Segundo. Un factor fundamental que explica las diferencias en DTR entre territorios que tienen riqueza mineral son los actores (y sus coaliciones) quienes logran influir y dar soporte a los gobiernos locales, las mismas que también ejercen influencia en las acciones de las empresas. A su vez, dichas coaliciones se diferencian de forma cualitativa en base al proceso de formación institucional previo al establecimiento de la industria extractiva y el poder que detentan se basa en el acceso y control de activos (naturales, humanos, sociales y políticos).

Tercero. Los actores y coaliciones del espacio rural desarrollan proyectos territoriales y generan identidades territoriales tomando a lo local –lo municipal– como el espacio inmediato desde donde se pueden forjar y hacer tangible sus proyectos territoriales. Los actores y coaliciones que se ubican en lo supra-territorial toman al espacio rural como parte de los proyectos territoriales, pero estos proyectos no necesariamente incluyen a todos los grupos rurales.

Cuarto. El grado de descentralización fiscal es determinante del impacto sobre el cambio económico y social de los territorios rurales. La sola desconcentración administrativa, genera capacidades de gestión, pero no permite procesos auto sostenidos de desarrollo territorial.

Quinto. La expansión de las industrias extractivas produce cambios institucionales que tienden a retroalimentar su expansión. Tales cambios sobre todo se refieren a los derechos de propiedad sobre activos naturales. Pero también la expansión induce a que los actores rurales reivindiquen sus derechos de propiedad al mismo tiempo que estén dispuestos a negociarlos a cambio de compensaciones.

Sexto. El conflicto respecto de usos alternativos del capital natural (entre actividad gasífera u otra actividad productiva basada en capital natural) y de las secciones del territorio rural donde este se ubica, se exacerba o resuelve en espacios públicos que trascienden lo rural.

2. Marco metodológico y área de estudio

El enfoque metodológico para abordar las hipótesis mencionadas ha sido el de estudios de caso comparados. Dentro de la escala de territorialidades que las DTR suponen, los dos casos abordados en este trabajo han sido considerados

como sub-territorios, (delimitados por el espacio municipal) y que son parte de un espacio mayor (el departamental o regional). Las DTR en ambos sub-territorios fueron analizadas comparativamente, fundamentalmente bajo criterios de tipo institucional y de administración pública.

Geográficamente, nuestra investigación se situó en el departamento suroriental de Tarija (ver Mapa 1.1), una región que concentra el 80% de los recursos de hidrocarburos de Bolivia.

Mapa 1.1. Departamento de Tarija, Bolivia



Fuente: Cartografía SED, Universidad de Manchester.

La selección de espacios municipales también se basó en las historias particulares de su conformación y evolución. Como parte de territorios mayores ambos sub-territorios han evolucionado dentro del mismo contexto y, sin embargo, produciendo resultados de desarrollo diferentes.

Los casos seleccionados fueron los de las secciones municipales de Villamontes y Entre Ríos, ambos en el departamento de Tarija en el suroriente boliviano, el primero ubicado en la zona del chaco y el segundo entre el valle tarijeño y el chaco. Puestos dentro del contexto de expansión de la industria de los hidrocarburos la comparación de estos dos casos ha buscado estudiar el impacto de factores externos y extraterritoriales en la transformación de espacios *más locales*. La comparación de los casos buscó también dar cuenta de la interacción entre los procesos organizativos de diverso grado de consolidación, con los de movilización social, articulación política, integración económica y generación de identidades territoriales.

Los métodos de investigación usados combinaron instrumentos cualitativos y cuantitativos. La investigación cualitativa incluyó la identificación exhaustiva de las organizaciones e instituciones del sector público, privado y de la sociedad civil (local y comunitaria) presentes en las áreas rurales de los estudios de caso, así como la identificación de las principales organizaciones e instituciones en centros urbanos. A los representantes de estas organizaciones se los entrevistó con una guía estructurada que luego fue procesada en base a frecuencias y rankings; se lograron realizar y validar 138 entrevistas. Esta parte de la investigación también incluyó entrevistas no estructuradas a informantes clave del Estado, las empresas y las comunidades en Tarija, y las ciudades de Santa Cruz y La Paz. Las entrevistas se realizaron en varias fases durante el período 2009-2010. La necesaria revisión documental y bibliográfica se hizo en Tarija, La Paz y Manchester. Los resultados preliminares de la investigación fueron presentados y discutidos con grupos focales conformados por representantes de todos los sectores incluidos en las entrevistas; estos se llevaron a cabo en la ciudad de Tarija y los centros urbanos de Villamontes y Entre Ríos. La investigación cuantitativa se realizó para documentar la dimensión ambiental de las DTR. Esta incluyó la modelación de los cambios ambientales (en términos de servicios ecosistémicos) en bases de datos SIG alimentadas por información de imágenes de satélite (véase el capítulo de Hinojosa y Hennermann para mayor detalle).

3. Marco conceptual para entender dinámicas territoriales rurales en contextos de expansión de industrias extractivas de hidrocarburos

De los múltiples enfoques para estudiar el desarrollo rural, nuestra investigación sobre DTR toma conceptos de estrategias de vida y acceso a activos (*livelihoods* en la jerga anglosajona), de servicios ecosistémicos, de capital social y capital político, de descentralización fiscal y de articulaciones productivas.¹ Con ello, combinamos elementos de economía política, geografía económica y de estudios del desarrollo y nos ubicamos conceptualmente en:

- i) los marcos generados para hablar del desarrollo territorial, marcos que enfatizan las interacciones entre lo productivo y lo institucional;
- ii) un concepto de “proyectos territoriales”, que plantea entender cómo distintos actores buscan construir e imponer su visión de territorio;
- iii) un concepto de escala, que insiste en la importancia de entender la articulación entre lo internacional, lo nacional y lo local en la construcción de territorio;
- iv) articulaciones productivas, que plantean entender las dinámicas que se dan dentro de la estructura productiva en relación con los espacios físicos en los cuales operan;
- v) conceptos de estrategias de vida y acceso a capitales, que permiten entender las diversas formas de actividad económica que las poblaciones rurales desarrollan en base a su acceso a activos y las relaciones sociales y de poder que influyen en dicho acceso.

Planteamos que, para el estudio de las DTR, el enfoque de estrategias de vida permite entender la lógica de cambio de los pobladores rurales en base a su acceso, control y acumulación de activos. Estos se refieren a: activos naturales (tierra, recursos del subsuelo, agua, bosque, etc.), activos físicos y financieros (infraestructura, maquinaria, equipo, dinero, etc.), capital humano (salud, educación), capital social y capital político. De todos estos activos, los activos naturales (tam-

1 En alguna medida, la industria extractiva de hidrocarburos podría ser estudiada a partir del enfoque de cadenas productivas pues involucra a un conjunto de actores y funciones a la largo de la cadena, distintos procesos y momentos de agregación de valor, y negociaciones entre estos distintos actores sobre la distribución social (y espacial) del valor producido en la cadena (Bridge 2008; Coe *et al.* 2004; Gereffi *et al.* 1994). Sin embargo, en Bolivia, los encadenamientos productivos –si acaso se dan– son sobre todo extra-territoriales. El elemento de mayor influencia dentro de lo que sería una cadena es su articulación a la acción pública del Estado a través de la generación de ingresos fiscales.

bién denominados capital natural), por su capacidad de generar servicios ecosistémicos (MA 2005), no solamente permiten entender los cambios en las estrategias de vida rurales, sino que posibilitan discutir la sostenibilidad de las DTR y de las estrategias de desarrollo basadas en la extracción de recursos naturales no renovables (ver el capítulo de Hinojosa y Hennermann).

Para abordar el tema del rol de actores y coaliciones en las DTR, articulamos los conceptos de capital social y de capital político. Entendemos al capital social como las relaciones de confianza y apoyo mutuo, organizaciones, redes, normas de conducta y funcionamiento, en conjunción a elementos culturales únicos. El capital político se refiere a la capacidad de influencia de los grupos que acumulan capital social en la toma de decisiones y se hace tangible en las instituciones que genera. Para entender dicha conexión y, por tanto, la formación de coaliciones y su efecto en las dinámicas territoriales rurales, elaboramos en el concepto de *proyectos territoriales* (Wilson 2004; ver también el capítulo sobre territorios de Hinojosa *et al.* en este volumen).

El rol de la inversión pública y la descentralización fiscal, como elemento principal de la política pública localizada, tiene conexión con el debate sobre si los recursos naturales no-renovables son una “maldición” o más bien una “potencialidad”. Ambos temas permiten abordar el efecto de la acción pública del Estado sobre las posibilidades de desarrollo territorial, tanto de los territorios ricos en recursos minerales como de los que no (ver el capítulo sobre pobreza y política social de Hinojosa en este volumen y las referencias citadas).

En los diversos temas de nuestra investigación y los respectivos capítulos en este volumen, los elementos conceptuales elaborados arriba se contextualizan dentro de la “estrategia de desarrollo basada en la industria extractiva” que varios gobiernos de la región identifican como medio para promover el desarrollo de países de bajos ingresos y niveles de pobreza altos. Por la ubicación de los recursos hidrocarbúricos en el área rural y la inevitable gran escala en su explotación, entender las DTR dentro de esta estrategia facilita ver las relaciones económicas y de poder a diversas escalas, las mismas que enfatizan lo local (léase, lo rural) pero que lo trascienden y conectan con lo nacional y global. Así, a nivel macro el argumento económico de aprovechar las ventajas comparativas que plantea el modelo primario exportador, en base a inversión externa (debido a la insuficiencia de ahorro interno), se complementa con un argumento geopolítico, cual es el de garantizar la auto-suficiencia energética y de afectar el posicionamiento del país rico en hidrocarburos en ámbitos regionales internacionales. A nivel local, el argumento económico favorable al crecimiento se sustenta en la renta fiscal que las localidades pueden obtener bajo determinados esquemas de descentralización fiscal. (Ver los Capítulos 6 y 7 en este volumen).

Desde un enfoque más normativo señalamos que, para que funcionen las articulaciones entre lo productivo, lo institucional y lo territorial, tienen que existir o surgir un conjunto de arreglos institucionales y sociales que faciliten la presencia del sector extractivo. Al mismo tiempo, tales arreglos tendrían que facilitar modelos de crecimiento que reduzcan la pobreza, mejoren la distribución y permitan la sostenibilidad ambiental. Es considerando estos aspectos normativos de una estrategia de desarrollo que conectamos los conceptos de estrategias de vida con los de capital social y político.

En las secciones siguientes se hace el análisis de dichas articulaciones y se discute las condiciones bajo las cuales el crecimiento en base a un modelo extractivo genera inclusión y sostenibilidad.

4. El contexto nacional en que se da la expansión reciente del gas

El punto común de las estrategias de desarrollo impulsadas en Bolivia desde inicios de su época republicana es que éstas han estado basadas en la extracción y exportación de sus recursos naturales, esencialmente minerales (metales y gas). Lo que diferencia a unos períodos de otros es la ideología nacionalista o privatista de los gobiernos de turno para asignar derechos de propiedad y uso de los recursos minerales. La tendencia nacionalista se orienta a la estatización del sector, esto es, el Estado se otorga el derecho sobre la propiedad de los recursos, su explotación y el control de los beneficios de la extracción. Bajo un régimen privatista, el Estado otorga al sector privado (sea este de origen nacional o extranjero) la propiedad o el derecho de usufructo de los recursos mineros y captura los beneficios de la explotación vía impuestos u otras formas de compensación. Desde mediados de la década de 1980 en que se impulsan programas de ajuste estructural,² la privatización de las industrias extractivas de metales e hidrocarburos explícitamente se dirige a la inversión directa extranjera (Onorato *et al.* 1998; Banco Mundial 1996). El impulso a los hidrocarburos se da por el posicionamiento de Bolivia como el segundo país con mayores reservas de gas en el continente sudamericano y por su relativa mayor sostenibilidad ambiental frente a la minería metálica (Banco Mundial 2005). La “nacionalización” de los hidrocarburos que el gobierno de Evo Morales del Movimiento al Socialismo (MAS) impulsa desde 2006, en la práctica, se da bajo la forma de una renegociación de contratos con empresas internacionales para incrementar sus contribuciones y busca la participación directa del Esta-

2 Para un resumen de las reformas de ajuste estructural y la reubicación de Bolivia en el ámbito internacional véase De la Garza y Toledo (2002).

do en las fases de producción, transformación y comercialización de gas y petróleo (Gaceta Oficial de Bolivia 2007). El renovado énfasis en industrias extractivas se da además en un contexto regional (sudamericano) en el cual crecientemente se busca la integración energética y de infraestructura (Molina *et al.* 2009).³

Los resultados de las diversas estrategias de política de los últimos 20 años han sido: un nivel de crecimiento sostenido del PIB (113% entre 1988-2008) (INE 2009a); una estructura productiva que no cambia en la relación de sectores primarios, secundarios y terciarios y que, dentro de los primarios, reposiciona a las actividades extractivas de hidrocarburos y minerales y disminuye el peso de la agricultura;⁴ y un reforzamiento de la dependencia externa de la economía por efecto de los hidrocarburos (en menos de 10 años, los hidrocarburos representaron de 6% a 50% de las exportaciones).

Un proceso paralelo a la definición de la base productiva de la economía del sector público ha sido el de la concentración o desconcentración de las finanzas y la toma de decisiones a nivel del Estado. Históricamente, este proceso estuvo caracterizado por un elevado nivel de concentración de la acción pública en la ciudad de La Paz. Con las reformas institucionales que durante la década de 1990 siguieron al paquete de ajuste estructural de mediados de los años ochenta,⁵ se da un proceso de descentralización administrativa y fiscal que habilita a espacios sub-nacionales (las municipalidades) a ser actores –con capacidad de decisión y recursos financieros– en las dinámicas de sus jurisdicciones territoriales y, en particular, en el área rural.⁶ Luego, hacia 2006 con la reformulación de la Ley de Hidrocarburos, se refuerza el proceso de descentralización fiscal a través de la mayor orientación de recursos a los gobiernos departamentales y, a través de ellos a los municipales.⁷ Junto a lo anterior se da la reformulación del Servicio

3 En determinados momentos estas políticas no habrían estado orgánicamente vinculadas (entrevistas de Anthony Bebbington a representantes de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana-IIRSA y del BID, que cofinancia la Iniciativa (IDB 2007).

4 Las manufacturas son básicamente pequeñas y medianas empresas (18 y 19% del PIB entre 1988-2008). Las actividades agropecuarias caen de 17% en 1989 a menos de 15% en 2008. Los minerales, por efecto de precios internacionales entre 2004-2008, crecen de 11% a cerca de 15%.

5 Las reformas institucionales promovidas por la coalición en el gobierno MNR-MBL (1993-97) bajo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, incluyen la reforma de la Constitución, la ley de capitalización, la reforma educativa, caen de 17% en 1989 a menos de 15% en 2008. Los minerales, por efecto de precios internacionales entre 2004-2008, crecen de 11% a cerca de 15%.

6 Antes de la Ley de Participación Popular las municipalidades del país solo tenían jurisdicción sobre áreas urbanas (Farfán 2004).

7 Hacia 2008 la Prefectura de Tarija recibió el 36% de los ingresos totales que por concepto de renta de hidrocarburos reciben las prefecturas del país, lo que incluye los ingresos por el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD), las regalías departamentales y el Impuesto Directo sobre los Hidrocarburos (IDH). En los últimos años Tarija recibió 340 veces de lo registrado en 1997.

Nacional de Reforma Agraria y el régimen de distribución de tierras (conocida como la Ley INRA).⁸ (Véase también el capítulo de Chumacero sobre tierra en este volumen).

5. Las dinámicas territoriales rurales en Tarija

Las dinámicas provinciales observadas en Bolivia tienen diversas bases productivas. Mientras en varias de las regiones llanas del “Oriente” (particularmente en los departamentos de Tarija y Santa Cruz) y de algunos valles de Cochabamba y La Paz es la agricultura comercial de mediana y gran escala, en otras como en el chaco tarijeño el dinamismo está ligado a la expansión de la extracción de hidrocarburos y la inversión pública financiada por las rentas del sector (Hinojosa *et al.* 2009).

En los sub-territorios de Tarija las dinámicas territoriales que se observaron en alrededor de dos décadas previas a la expansión del gas (1980-1990) están diferenciadas por tres factores fundamentales: ubicación geográfica y articulación con centros urbanos, disponibilidad de activos naturales para la agricultura comercial y capacidad de hacer alianzas por parte de los actores de cada sector productivo. En las zonas de valle de las provincias del centro y oeste de Tarija, buena parte del dinamismo estaría explicado por el desarrollo del sector vitivinícola que emerge sobre la base de un grupo empresarial de mediana escala (para los estándares de Tarija y Bolivia) y que se habría beneficiado del mercado abierto por el crecimiento de la ciudad de Tarija y de otros centros urbanos menores (Beck *et al.* 2001) y de la inversión pública que se dio a partir de la producción de petróleo y la producción de azúcar en la provincia Bermejo. Este sector de agroindustria y el crecimiento urbano habrían articulado a un significativo grupo de agricultores, potenciado la estructura de cultivos al interior de los valles (uva y otras frutas, maíz, papa y diversas hortalizas) y, de alguna forma, incidido en flujos migratorios de retorno (Junta del Acuerdo de Cartagena 1988).⁹ En la zona del chaco (hacia el sur este del departamento), las dinámicas habrían estado dominadas por el desarrollo comercial de frontera y el crecimiento urbano de Yacuiba. Como resultado de estas dinámicas, la composición del PIB departamental era más o menos equilibrada entre la agricultura, los hidrocarburos, las manufacturas y servicios (en un rango de 10% y 20% cada uno). Las repercusiones de estas dinámicas en el bienestar social también fueron positivas, hacia 2001 el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas había disminuido de 69% a 51% durante

⁸ Ley N° 1715 de 18 de Octubre, 1996.

⁹ Las zonas alto-andinas de Tarija donde no se produce uva demuestran mucho menor crecimiento económico.

el periodo intercensal 1992-2001 y la pobreza extrema de 35,9% a 14,6% (frente a 34,2% y 21,0% registrados a nivel nacional) (INE 2009a).

Con la expansión de las explotaciones gasíferas en la zona del chaco a partir del año 2000, el chaco y Tarija se repositionan en el escenario económico y político nacional. El potencial concentrado en el departamento de Tarija (30% del petróleo nacional, 56% del gas natural y alrededor del 85% de las reservas de gas del país, CEDLA 2008) produjo un cambio substancial en la estructura productiva de la economía departamental, en sus finanzas públicas (ver el capítulo de Hinojosa sobre política social) y en el peso relativo de cada sub-territorio (ver el capítulo de Hinojosa *et al.* sobre territorios).

Las dinámicas territoriales a partir de la expansión de la explotación del gas

Dada la concentración de hidrocarburos en el territorio tarijeño y el patrón de distribución de las rentas (regalías) del sector, hacia inicios de la década de 2000 el departamento de Tarija, más que otros en Bolivia, promovió una estrategia de crecimiento que articulaba la expansión de la explotación de gas con miras a su exportación a mercados de México, Estados Unidos y potencialmente Chile. La disputa que esto provocó en otros grupos y regiones del país condujo a lo que luego se denominó “la guerra del gas”, la cual no cuestiona la estrategia de desarrollo respecto de su base productiva (la explotación primaria de los hidrocarburos) sino que refleja la lucha de poder para el control de sus rentas (Molina *et al.* 2009; Perreault 2006; PIEB – Comunidad de Estudios JAINA 2005). Esta, como el vicepresidente de Bolivia e ideólogo del MAS, García Linera, sugiere, fue también el resultado del empoderamiento de una clase plebeya que hasta entonces había estado relegada (García Linera 2010) y la lucha de grupos por llevar adelante sus visiones de “proyectos territoriales” (Hinojosa *et al.* en este volumen). Si bien la recomposición de la geopolítica interna (nacional) no estaba puesta claramente desde el principio (léase a Poveda y Rodríguez 2006), el conflicto político en torno a la distribución de las rentas de los hidrocarburos condujo a reformas institucionales del Estado y del territorio nacional que, hacia fines de 2010, incluía una nueva Constitución y cinco leyes fundamentales, entre ellas la Ley de Autonomías.¹⁰

De forma similar, al interior de Tarija, si bien se dio una cierta unidad en torno al proyecto regional de apoyar la expansión del sector extractivo (Lema 2008), las disputas entre sus sub-territorios –o para ser más precisos entre los líderes

10 Ver Fundación TIERRA (2010a) para un resumen y breve análisis de estas leyes.

de los sub-territorios y sus respectivas instituciones– se dieron también por la búsqueda de un mayor control de rentas y un reposicionamiento en la geopolítica doméstica. De esta manera, el significativo cambio en el flujo de recursos fiscales provenientes del gas ha estructurado también las relaciones institucionales al interior del departamento.¹¹

Estas relaciones de escala entre lo nacional, lo regional y lo local resultan decisivas para entender las dinámicas territoriales. Por un lado están los niveles institucionales establecidos para la administración estatal (gobierno central, prefectura o gobierno departamental y gobiernos municipales) y, por otro lado, la legitimidad política (democrática) de estos niveles administrativos para tomar y ejecutar decisiones de política pública que afectan tanto a sus respectivas jurisdicciones como al proceso de conformación de territorios.

Los cambios en las dinámicas económicas de la región de Tarija producidos durante la última década con la expansión del gas y sus efectos en las finanzas e inversión pública, ha conllevado a la reactivación de conflictos intra-regionales alrededor de la tierra y los recursos naturales (ver el capítulo de Chumacero en este volumen). Los múltiples actores del área rural (ganaderos, campesinos agricultores, menonitas, grupos indígenas y el movimiento sin tierra), algunos de ellos copartícipes de élites locales, se han venido enfrentando y buscando soporte a sus reivindicaciones a través de estrategias diferentes. Una ha sido la construcción de espacios de “segundo nivel” que los articule y represente; por ejemplo, los pueblos indígenas guaraníes están articulados en torno al Consejo de Capitanes Guaraníes del departamento de Tarija (CCGT) y el pueblo Weenhayek en la Organización de Capitanes Weenhayek y Tapiete (ORCAWETA) y éstos, a su vez, en la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Esta construcción de representatividades no ha sido fácil pues, por ejemplo, la participación de la ORCAWETA en la CIDOB es directa, mientras que la del CCGT es sólo a través de la Asamblea de Pueblos Guaraníes nacional; no sintiéndose los pueblos indígenas guaraníes de Tarija propiamente representados, establecieron canales de articulación directa con el Estado y las empresas de hidrocarburos. Bajo esta otra forma de articulación y negociación directa de la representación de base con los sectores estatal y privado, los grupos indígenas, aunque no oficialmente, designaron candidatos para asambleístas nacionales, departamentales y regionales del chaco y, al interior de los municipios, comités de relacionamiento con las empresas privadas y la corporación estatal YPFB). Las articulaciones –e inclusive alianzas– también se han dado dentro del mismo Estado, no solamente por motivos

11 Por ejemplo, entre 2004 y 2008, los recursos controlados por la Prefectura se incrementaron de Bs. 523 millones a Bs. 1.982 millones, mientras que los de los municipios subieron de cero a Bs. 444 millones (ver también Chumacero 2010a).

administrativos, sino también políticos (por ejemplo entre municipios para crear frentes subregionales, o entre municipios y gobierno nacional). El resultado de ello es que las formas de construcción de articulaciones de alguna forma han debilitado las alianzas de grupo (por ejemplo, dentro de los pueblos indígenas) y han dado lugar a articulaciones que en cierta medida facilitan el clientelismo y el desarrollo de relaciones más asimétricas. (Ver Cortez en este volumen).

Los cambios institucionales que han sido necesarios para impulsar la estrategia “desarrollo a través del gas”, así como los que han surgido durante el proceso de construcción de proyectos territoriales, pusieron en evidencia la superposición de atribuciones dentro de organismos del Estado para determinar la propiedad y control de los recursos naturales, tanto en espacios formales (y legales) como en la práctica. Es precisamente en la práctica donde el ejercicio de poder se hace manifiesto y los intereses de grupos dominantes se imponen. Por ejemplo, entre las instituciones que rigen el acceso a la tierra y los recursos del subsuelo, la adjudicación y control de la tierra no solo pasa por lo que determina el INRA (organismo creado expresamente para normar sobre tierra) sino también por la Ley de Hidrocarburos y, en la práctica, por la forma cómo ésta es implementada por los organismos públicos del sector (YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos y Energía).

Las dinámicas económicas rurales en los municipios de Villamontes y Entre Ríos

La dinámica territorial en Villamontes ha estado dominada por su creciente espacio urbano, limitado nivel de articulación vial con la ciudad de Tarija –que, no obstante, continúa siendo su mayor mercado para la producción agropecuaria– y un mayor relacionamiento con el departamento de Santa Cruz hacia el norte y Yacuiba hacia el Sur, sobre todo por efecto de la carretera asfaltada.

Desde mediados de 1950 hasta el año 2000 la región de Villamontes se ha considerado “ganadera” por excelencia, aunque su estructura productiva revelaba más bien una economía diversificada de ganadería bovina extensiva y tradicional con bajo rendimiento, pesca comercial, algo de manufactura (aceites de soya y pequeñas y medianas empresas de equipo para agricultura) y agricultura en gran parte de subsistencia y de secano. Sus principales mercados para la agricultura y la manufactura eran locales, la ciudad de Tarija para la ganadería comercial y los mayores centros urbanos de Tarija y ciudades principales del país para la pesca.

Entre Ríos ha tenido históricamente una dinámica económica marcada por las actividades agropecuarias, pero en disminución (71,6% de la población en 1972 tenía como principal actividad la agricultura, ganadería, caza y silvicultura y sólo

47,0% en el 2001) (INE 2005). Su producción agropecuaria (principalmente maíz, maní, fruticultura y un poco de horticultura, y ganadería vacuna a pequeña escala) tenía como principal mercado la ciudad de Tarija y, estacionalmente, los mercados regionales de centros urbanos menores hacia el departamento de Santa Cruz (Camiri, Yacuiba, Santa Cruz) y la ciudad de La Paz (para el maní).¹²

Con la expansión de la explotación del gas en el departamento, las dinámicas rurales descritas no cambiaron mucho en ninguno de los municipios. No obstante, y aunque no se tienen estimados recientes, se opina que crecientemente en Villamontes, Entre Ríos, así como en otros municipios del chaco, la población dedicada a actividades de servicios ligadas al sector gasífero (construcción, hotelería y catering, servicios no calificados y comercio) habría crecido.¹³ Además, de acuerdo a las entrevistas realizadas, la demanda de mano de obra por parte de las empresas de hidrocarburos, así como por las empresas contratistas que ejecutan obras para los municipios y la prefectura, también habría generado empleo temporal que habría inducido la migración intra y extra departamental (por ejemplo de zonas del altiplano boliviano).

Si bien la mayor parte de articulaciones productivas de mayor valor agregado de las empresas de la industria del gas se dan con empresas subcontratistas de Santa Cruz,¹⁴ la industria ha articulado negocios locales y ha motivado nuevos emprendimientos con capitales también locales. Pero lo que ha generado mayor impacto tanto en las economías de Villamontes como en la de la ciudad de Tarija (y las que esta articula en los valles del resto del departamento) es la inversión pública que ha sido habilitada con la transferencia de rentas del gas.¹⁵ En el tiempo y como resultado –al menos en parte– de las restricciones institucionales para la inversión pública en cada nivel de gobiernos sub-nacionales, la inversión pública fue fundamentalmente orientada a infraestructura vial, habilitación urbana, electrificación rural, infraestructura de servicios de educación y salud en área rural y, muy recientemente, infraestructura hídrica (atajados, represas, pozos y algo de riego en Villamontes). (Ver los capítulos de Chumacero sobre inversiones y de Hinojosa sobre política social; también, Ministerio de Hacienda 2008).

12 Declaraciones de dirigentes agrarios e indígenas y de miembros del equipo de CERDET (septiembre 2009).

13 Cortez (2009) y declaraciones de diversos actores dadas en entrevistas (2009-2010).

14 En entrevistas a empresas de la industria del gas se manifestó que todas las operaciones se dirigen desde Santa Cruz debido a que esta ciudad concentra todas las facilidades de servicios, infraestructura y recursos humanos que la industria necesita (entrevistas agosto 2010).

15 Para una revisión de la política de inversión pública en el período 2006-2009 véase Gobierno Departamental de Tarija (2009).

Estas dinámicas económicas habrían producido los siguientes efectos: primero, una cierta mayor diversificación de actividades productivas y con énfasis a partir del período de expansión del gas. Segundo, reducción de pobreza, en particular la referida a necesidades básicas. Si bien esta tendencia se venía observando ya desde inicios de los años noventa, durante la década de 2000 se ha reforzado (ver el capítulo de Hinojosa sobre política social) y colocado a Tarija entre los primeros departamentos con mayor nivel de índice de desarrollo humano en el ranking nacional.¹⁶ Tercero, signos de mejora en la distribución de ciertos activos y, sobre todo, a favor de grupos indígenas, si bien no se puede decir mucho sobre un efecto agregado en la distribución de ingreso u otros indicadores de bienestar. (Ver Cortez 2010).

Respecto a los efectos sobre vocaciones productivas –e identidades territoriales forjadas en base a ellas– no se tiene evidencia para concluir. En Villamontes “lo ganadero” ha continuado en el discurso regionalista y ha orientado la asignación de recursos públicos. Sin embargo, en opinión de los propios ganaderos, en la última década la productividad del sector habría caído, el stock de ganado no habría crecido significativamente y sus mercados locales se habrían reducido por falta de competitividad frente a la competencia de los ganaderos de Santa Cruz (y de la carne argentina que ingresa vía contrabando). También los costos laborales se habrían incrementado por efecto de una menor oferta de mano de obra, tanto de trabajadores asalariados (los jornaleros del sector) quienes se habrían desplazado a otros sectores como la construcción, que remunera mejor, como por abandono de prácticas de patronazgo –y esclavitud– de grupos indígenas.

Las externalidades de la expansión de la explotación del gas en las dinámicas territoriales descritas serían fundamentalmente dos: un efecto indirecto sobre el deterioro de la base social que da soporte al crecimiento económico por el surgimiento de conflictos por acceso a activos naturales y disputas de límites territoriales (por ejemplo, entre las provincias O'Connor y Gran Chaco a raíz del reclamo del Campo Margarita). Este además habría impactado en la distracción de recursos públicos y privados de un esperado uso productivo.

16 En Entre Ríos la tasa de pobreza registrada en 2001 era alta (37,3% de pobreza moderada y 50% de indigencia) (calculada en base a las NBI, PNUD-INE 2005). La reducción observada durante el período 1992-2001 es significativa y cercana a lo registrado en la ciudad de Tarija, con mayor incidencia en la reducción de indigencia y marginalidad. La mayor parte de la población afectada por la pobreza está en el área rural y en los pueblos indígenas. Durante el mismo período la tasa de alfabetismo creció en cerca de 10%, el porcentaje de viviendas con acceso a servicios básicos de agua y saneamiento casi se duplicó, pero la tasa de mortalidad infantil continuó alta y el acceso a servicios de salud continuó siendo bajo (INE 2004).

Se ha insistido también en que otra externalidad negativa de la explotación del gas sobre el sistema productivo habría sido el deterioro de la base ambiental, por ejemplo, a partir de la reducción de recursos forestales, cercamiento de ciertas zonas pro-conservación con exclusión de poblaciones locales y consecuente privación de los activos naturales que estas requieren para sus estrategias de vida, y contaminación de aguas por efecto del gas y las obras de infraestructura (CERDET 2006; Mamani 2003). Sin embargo, si bien no se verifica una mejora significativa del ecosistema de Villamontes o de Entre Ríos, tampoco se ha podido comprobar un deterioro importante en los activos naturales que soportan las dinámicas territoriales. (Ver el capítulo de Hinojosa y Hennermann).

6. Principales actores y alianzas y proyectos territoriales

El papel de lo urbano

Un punto común entre Villamontes, Entre Ríos y la ciudad de Tarija es el rol que las élites urbanas han jugado en la conformación de alianzas y la formación de proyectos territoriales. En Tarija dicha élite emerge de redes familiares de ingresos medio-alto y alto (para los estándares de Tarija) y que, desde su ubicación en la ciudad, tiene inversiones en la agroindustria, la construcción, medios de comunicación y servicios (médicos, legales, educativos). También pertenecen a estos grupos funcionarios de la Corte de Justicia, intelectuales y algunos militares. En la reciente época democrática del país, miembros de estas élites conformaron diferentes partidos políticos conservadores de derecha y centro-derecha y han mantenido membrecía en dos logias masónicas y otras asociaciones de grupo. Tradicionalmente, este grupo ha ocupado el gobierno departamental y el gobierno local de la ciudad; a partir de ello se ha impulsado un proyecto territorial que busca integrar las regiones tarijeñas a través de un corredor biocénico que facilite nichos de exportación (como el vino y el singani). En su discurso, se trata de “sembrar el gas”, es decir, realizar inversiones estratégicas en cadenas productivas diversificadas y que articulen al departamento, en particular a Entre Ríos con la ciudad de Tarija y las otras provincias del oeste del departamento (ver también Fundación FAUTAPO 2009). La articulación con el chaco se ha postulado más bien como una aspiración.

En Villamontes las tradicionales élites urbanas resultaban de una combinación de poder económico (sobre todo ganadero) y político en base a su acceso a la administración pública. Con el crecimiento urbano en las últimas dos décadas estas han pasado a actividades orientadas al comercio, servicios (transporte, construcción, etc.) y la administración pública. Bajo la forma de “familias extendidas”, la

generación más joven, que se ha ubicado en la ciudad y ha accedido a poder político vía la administración municipal u otras instancias estatales, guarda estrechos lazos familiares con quienes continúan en el área rural dedicados a la ganadería, la pesca comercial y la agricultura. Como señala Cortez (2010) estas conexiones han sido instrumentales para las decisiones de inversión pública y para la formación de coaliciones territoriales.

En Entre Ríos, en cambio, la élite urbana es de reciente formación y guarda estrecha relación con la ciudad de Tarija mediante un sostenido flujo migratorio en ambas direcciones; se ha concentrado en el centro poblado mayor y tiene mayor participación en la administración pública, el comercio y servicios de pequeña escala. Su acción pública se hace a partir de su presencia en la administración municipal y su proyecto territorial –si acaso alguno puede ser identificado como tal– es el de articulación con la ciudad de Tarija en base a cadenas productivas.

Los actores rurales y la formación de coaliciones

En la historia contemporánea de Villamontes y Entre Ríos, los actores que han cohabitado el espacio rural han sido los ganaderos, los campesinos y los indígenas. A partir de la explotación del petróleo y el gas, se suman a estos las empresas de hidrocarburos.

Un punto en el tiempo que marca el surgimiento de actores rurales en Tarija es la Reforma Agraria de 1953, la cual, aunque en un proceso largo de implementación, sienta las bases para la apropiación del espacio rural. Como describe Cortez (en su capítulo sobre actores y coaliciones) esta dio lugar a ocupaciones de facto (por ejemplo por familias urbanas y campesinos migrantes en Villamontes); a algún nivel de asignación de tierras a grupos indígenas, pero sobre todo a su “arrinconamiento” en espacios poco productivos; y a un proceso dominante de establecimiento de la ganadería como actividad que definía lo rural en el chaco y sobre todo en Villamontes. En base a esto último, el sector de la dirigencia de los ganaderos se ha articulado a los espacios urbanos donde se decide sobre lo rural y ha ejercido influencia política directa (por su participación en la administración pública) e indirecta a través de su apoyo a agrupaciones político partidarias; así, los partidos políticos “más tradicionales” se apoyaban en la Federación de Ganaderos. En Entre Ríos el sector ganadero ha sido considerablemente más pequeño y por restricciones en la disponibilidad de tierra y agua sólo ha logrado desarrollarse en algunas zonas del sur de la provincia; consecuentemente, su peso político ha sido también bastante menor al que se dio en Villamontes (por ejemplo, no existe una asociación de ganaderos como la que hay en el chaco). Mientras en

Villamontes los ganaderos han formado alianzas con todas las instancias del gobierno local (i.e. municipio y corregimiento) y del departamental, en Entre Ríos el grupo ganadero se ha articulado más al gobierno departamental.

El sector campesino por su parte es el que ha estado fundamentalmente dedicado a la agricultura (no forrajera) y se compone de población local y migrante tanto del interior del departamento como de zonas del altiplano boliviano. Este en Villamontes ha tenido muy poco desarrollo debido a la poca disponibilidad de agua para riego. En Entre Ríos donde hay mayor disponibilidad hídrica la actividad agrícola está más difundida pero es de escala pequeña y familiar. Por otro lado, no siendo reconocidos como parte de pueblos indígenas no son sujetos de beneficios institucionales para el acceso a activos naturales u otros beneficios otorgados a la población indígena y tampoco han recibido mucha atención en el proceso de titulación impulsado por el INRA. (Ver el capítulo de Chumacero sobre tierra).

Con estas características en ninguno de los municipios la participación política de este grupo ha sido importante y, desde que se establecieron elecciones locales hacia inicios de la década de 1980, su asociación (la Federación Campesina) se ha orientado a brindar apoyo electoral de tipo clientelar. En Villamontes, hacia el segundo período del MAS, dicho apoyo se ha orientado al partido del gobierno central; con ello la organización campesina ha logrado tener alguna representación en la Asamblea Plurinacional (i.e. el Congreso legislativo de Bolivia). Tal representación ha sido solamente de grupo y no de sector, esto es, el grupo representa a los campesinos y no a los productores agrícolas; las pocas alianzas políticas que se han dado entre sectores campesinos e indígenas han sido coyunturales y débiles debido a que ambos grupos compiten por el acceso a la tierra y sus recursos naturales.

Los grupos indígenas (guaraníes, weenhayek y tapiete) han sido los que históricamente ocuparon buena parte de los espacios rurales en Tarija, sobre todo en el chaco. A pesar de que estos grupos se han reducido significativamente en el tiempo como resultado de procesos de enajenación y desposesión tanto de sus activos naturales como de su capital humano, siguen siendo sujetos importantes del espacio rural (véase el capítulo de Humphreys Bebbington). En los últimos 30 años, el sector indígena de Villamontes y Entre Ríos no ha desarrollado actividades económicas con base rural rentables más allá de la pesca comercial; más bien sus estrategias de vida han sido diversificadas y con un importante componente migratorio. No obstante este reducido peso económico, con la influencia del reconocimiento de la importancia de "lo indígena" como correlato de acuerdos internacionales basados en el Convenio 169 de la OIT, partir de 1990 su presencia ha

sido más frecuente en los escenarios de concertación política del departamento y del país. (Ver también el capítulo de Cortez).

Dicho proceso de visibilidad y de presencia política no sólo ha sido un resultado de factores exógenos. El surgimiento de organizaciones indígenas en Tarija se remonta a los años ochenta y surge de forma articulada con otros grupos indígenas de zonas bajas de Bolivia, sobre todo del departamento de Santa Cruz. Una de estas primeras organizaciones étnicas ha sido la Asamblea de Pueblos Guaraníes (APG) que dio lugar a la APG Itika Guasu (en Entre Ríos, provincia O'Connor).¹⁷ Por su parte, el proceso organizativo del pueblo Weenhayek en Villamontes fue más tardío y se dio en áreas geográficas más restringidas. En el pueblo Tapiete el proceso organizativo casi no se dio.

En el proceso de conformación de representaciones de grupo –de los pueblos indígenas– la articulación de las organizaciones ha sido jerárquica y de abajo hacia arriba, con un modelo que parte de la comunidad y termina en lo federativo.¹⁸ Si bien en el diseño esta forma de articulación habría buscado facilitar la participación y representación frente a otras organizaciones y el Estado en la práctica –y sobre todo desde la expansión del gas– las articulaciones, alianzas y negociaciones de las diversas instancias de representación indígena con los sectores de gobierno y con actores privados se han venido dando más bien de acuerdo a lo que era más conveniente. Como veremos más adelante, si bien esto habría permitido hacer las relaciones más operativas y funcionales, también habría tenido el efecto de hacerlas más clientelares.

El efecto gas sobre el capital social y el capital político

Uno de los impactos fundamentales de la expansión de la industria del gas en Tarija ha sido que se trastocaron las estructuras organizativas, del escenario político doméstico (regional o local) y de la forma de articulación de lo local con espacios y actores extra-regionales. Esto define las dinámicas territoriales que se han venido dando en la última década (Cortez 2010, Hinojosa *et al.* 2010). Este efecto gas, sin embargo, requiere ser visto como parte de un contexto mayor don-

17 La fortaleza de la organización guaraní solo se ve en Entre Ríos. Las organizaciones guaraníes del chaco (en Yacuiba y Caraparí) son considerablemente más débiles (CERDET 2006).

18 En un primer nivel están las comunidades de cada etnia; un segundo nivel de organizaciones agrupa a las “subcentrales”; un tercer nivel está constituido por grupos como la Asamblea del Pueblo Guaraní o la organización de Capitanes Weenhayek, cuya mayor representación es a nivel provincial. Finalmente, un cuarto nivel de organización se da a nivel nacional, mediante la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), que representa a todos los pueblos indígenas de la amazonía, chaco y oriente (con un aproximado de 300 mil personas) (Datos de CERDET).

de se dan cambios en las estructuras de poder dentro del Estado, cambios en los grupos que acceden al poder y nuevas formas de relacionamiento entre actores quienes, siendo o no actores territoriales, influyen en las DTR y la conformación de territorios.

En el escenario político de Tarija, hasta el año 2006, las alianzas facilitaban el acceso a los espacios de poder (i.e. de toma de decisiones) bajo canales que iban de arriba hacia abajo y con actores localizados, desde “la sede departamental” (la ciudad de Tarija) incorporando a líderes partidarios de centros urbanos mayores y terminando en algunos dirigentes de localidades rurales. El modelo de centralización departamental con desconcentración administrativa para la gestión pública era claro.

La descentralización fiscal *de jure* que se da en el país, luego de la “guerra del gas”, de la “nacionalización” del gas y la nueva Ley de Hidrocarburos, así como la descentralización intrarregional de facto (ver el capítulo de Hinojosa sobre política social), ha reforzado no sólo el surgimiento de nuevas clases políticas sino también la casi extinción de las antiguas¹⁹ (Seoane 2005; Vacaflor, Lizárraga y Tapia 2005).²⁰ Dentro de esta nueva clase se incluye a agrupaciones de diversa naturaleza como los comités cívicos regionales, el comité cívico departamental, los comités locales de desarrollo y las organizaciones indígenas. Todas estas, de una forma u otra, han estado influenciadas por el flujo de rentas de los hidrocarburos y, sobre todo, han buscado influenciar su apropiación a través de la asignación de la inversión pública, en particular en infraestructura (ver Cortez 2010; Chumacero 2010a); su participación en la definición de iniciativas de política social y de reducción de pobreza ha sido casi nula (ver Hinojosa 2010); esto, junto a la superposición de programas sociales implementados desde el gobierno central condiciona la eficiencia de la política social y su sostenibilidad (Frets-Cibils *et al.* 2006).

El “efecto gas” hace también que otros sectores que no tenían mayor presencia en los movimientos regionales (como los campesinos) encuentren cierto espacio para negociar su apoyo político a las organizaciones y dirigentes regionales y locales (sean éstas las de Tarija, del chaco, o de cada sección municipal) a cambio de atención y reconocimiento de sus demandas. Así, toma fuerza la Federación de Comunidades Campesinas de Tarija, la cual mediante movilizaciones y protestas

19 Partidos políticos como ADN (de derecha), el MIR y MNR (de centro derecha) que tradicionalmente eran representativos en Tarija desde 1982, cuando se recupera la democracia, hacia 2009 habrían casi desaparecido.

20 Reportes del Observatorio de Conflictos CLACSO-OSAL http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=3099

sociales (hacia 2007) logra negociar con la Prefectura de Tarija la entrega anual de un Bono Solidario (PROSOL) de aproximadamente 285 dólares a cada familia *campesina* para la adquisición de animales o implementos agrícolas, el único programa de esta clase en todo el país.

El “efecto gas” también ha hecho más visible al sector indígena (de los pueblos originarios de tierras bajas) que históricamente permaneció “invisible” en las esferas económicas y políticas de la región. La expansión del gas refuerza el posicionamiento de estos para reivindicar sus derechos de propiedad sobre tierra y territorio, pero también los hace vulnerables a decisiones que se dan fuera de sus territorios y del propio territorio departamental. (Ver Chumacero 2010b; Fundación TIERRA 2009).

Finalmente, los conflictos que se han dado por el acceso a las rentas del gas han trastocado las delimitaciones administrativas territoriales, debido a las debilidades institucionales que han existido desde siempre en el departamento y sobre todo en el área rural en lo que se refiere a definición de límites y derechos de propiedad. (Ver Hinojosa *et al.* 2010).

7. Construcción de territorios

Nuestra hipótesis sobre cómo se da el proceso de formación de territorios se centra en la competencia entre los proyectos territoriales que grupos internos y externos al territorio promueven. Dichos proyectos son construidos a partir de “imaginarios” sobre estrategias de vida preferidas, proyectos políticos y relaciones de poder en torno al control de los recursos minerales y las rentas que generan.

En la construcción de territorios en Tarija en el período 2000-2010 se puede distinguir a cada uno de los diversos actores que se mencionan en la sección precedente (élites urbanas locales, ganaderos, campesinos, indígenas, gobierno central y empresas) en base a los discursos que elaboran sobre sus proyectos territoriales.²¹ No obstante que en Tarija han coincidido distintos discursos que han posicionado distintas visiones de la región, el proceso de formación de territorio giraba en torno a cómo construir el colectivo regional considerando las diversas identidades territoriales (tarijeña, chapaca, chaqueña, indígena, campesina y ciudadana) (Lizárraga y Vacaflares 2007: 25). Sin embargo, desde el momento en

21 Nótese que la construcción de discursos en cada grupo no siempre es de consenso. Al interior de cada grupo las opiniones son diversas y en algunos casos inclusive opuestas, lo cual redundan en la conformación de alianzas y de proyectos territoriales. (Entrevistas 2009-2010).

que se dan las disputas a nivel nacional por la estrategia de cómo explotar el gas (la denominada “guerra del gas”) y cómo distribuir las rentas, la formación de territorios en Tarija deja de ser un proceso fundamentalmente endógeno –como históricamente habría sido– para pasar a ser uno fuertemente influenciado por factores extra-territoriales.

El discurso de las élites urbanas en la ciudad de Tarija –y, al inicio, también de Villamontes– ha sido usar los recursos del gas para insertar la economía doméstica (del departamento o del municipio) a los circuitos internacionales. De ahí, por ejemplo, el énfasis en redes viales como la biocéntrica y el apoyo a agentes económicos que estén mejor posicionados para insertarse en grandes mercados.

El discurso subsiguiente de líderes locales en Villamontes, apoyado por grupos ganaderos y campesinos, apunta más bien a controlar las rentas del gas para una articulación de tipo más intra-regional y direccionada a los principales mercados urbanos donde la producción local es comercializada. Para lograr tal control identifican al espacio inmediato de gestión territorial –por ejemplo la municipalidad– como el espacio privilegiado en el cual demandas y proyectos políticos pueden encontrarse.

El discurso de grupos indígenas aparece más bien direccionado a buscar el reconocimiento de sus derechos territoriales sobre el espacio que reclaman como históricamente suyo y, a través de ello, lograr acceso directo a espacios de negociación (con el gobierno o las empresas) sobre recursos financieros de retribución y/o compensación.

Por su parte, el discurso del gobierno central ha evolucionado de un proyecto central “nacional”, cuyo eje de control estaba en La Paz, hacia uno de “autonomías” que delega atribuciones con carácter territorial a espacios sub-nacionales.

Para cada uno de estos proyectos, el acceso a, y control de, las rentas del gas tangibilizan las relaciones de poder entre los diversos agentes y sientan las bases financieras para llevar adelante los respectivos proyectos territoriales. Este proceso de construcción de territorio durante la década, y sobre todo en períodos electorales, ha conllevado tensión, conflicto y redefinición de proyectos territoriales. Así, de un proyecto “unificado” de departamento enarbolado hasta poco después de la elección del primer gobierno regional en 2006, en 2010 el departamento –mediante votación– terminó administrativamente partido en dos (entre la nueva región de “El Chaco” y el resto del departamento). Este resultado, no buscado ni planificado al interior de Tarija, aparece más bien como un producto de la influencia del gobierno central que articula las demandas de los dirigentes

locales por una descentralización intra-departamental con el objetivo político de quebrar el poder del gobierno regional establecido en Tarija y así incrementar sus posibilidades de controlar los recursos gasíferos del chaco.

Cabe resaltar que, dados los hechos, en el proceso de construcción de territorios en Tarija aparece confrontada la idea de territorio que se formula en términos de espacio político para la *administración* del desarrollo local con la idea de territorio para la *toma de decisiones* y gestión del desarrollo (en el sentido DTR).

Los líderes locales ubicados en gobiernos locales (prefectura y municipios) reclaman la autonomía territorial en base a argumentos históricos de origen y del rol de Tarija en la geopolítica boliviana (Querejazu 1971) y a argumentos reivindicativos sobre el acceso y control a recursos territoriales. Por ejemplo, la siguiente nota es ilustrativa del sentimiento de algunas élites, quienes evocan la historia del departamento para fundamentar el porqué de la pretendida autonomía para Tarija y además relacionan esta evocación histórica a la explotación del gas:

“Conviene recordar que al año de 1810, Tarija igual que Paraguay y Uruguay éramos provincias de Argentina y que los “intereses” de no más de 17 comerciantes afincados en la tierra misma, fuertemente ligados al mercado de Potosí, nos ensartaron en Bolivia, mientras que las otras provincias, terminaron siendo Estados soberanos. No es tarde para repensar en estos hechos, porque –tampoco– fuimos parte formal y reconocida de Bolivia hasta el año de 1889.²² Lo que significa que –Argentina– recién resigna sus derechos sobre Tarija después de 63 años, al menos.

El pueblo nuestro [Tarija] es esencialmente autónomo y libre de origen, y su anexión se debe a un acto de fidelidad por autodeterminación precisamente; para ser no solamente castigados con una guerra donde perdimos más de 270 mil kilómetros cuadrados; y hay quienes –en el occidente– que creen que “han ganado la guerra con el Paraguay”, miran a Tarija como su “billetera” del gas...”²³

En el ámbito rural, los campesinos equiparan “territorio” con el espacio que le garantice el control de recursos básicos para su producción y reproducción (tierra, agua y bosque por el carácter extensivo de la producción pecuaria) (Calzavari 2006, citado en Lizárraga y Vacaflores 2007). El planteamiento de los indíge-

22 De acuerdo a la historia oficial, el departamento de Tarija fue creado en 1839 por el presidente Andrés de Santa Cruz.

23 Oscar E. Lazcano H., 2007.

nas suma a lo reclamado por los campesinos, un dominio total del territorio, lo que incluye el control de recursos del subsuelo y/o de los espacios en los cuales los hidrocarburos se encuentran. En la mayoría de casos, esto incluye la expropiación de tierras de terceros (los campesinos y ganaderos) o su expulsión de los territorios indígenas si no se llega a un acuerdo.²⁴

8. El rol del capital natural en las DTR y la cuestión de la sostenibilidad

En un modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos no-renovables, las implicancias de la explotación del capital natural y la afectación de su capacidad de generar servicios ecosistémicos son de crucial importancia para la sostenibilidad del modelo y de las DTR que este genera. Como Hinojosa y Hennermann (en este volumen) sugieren en su análisis de sostenibilidad ambiental de las DTR, esta relación entre el medio ambiente y las dinámicas territoriales puede ser vista desde dos enfoques complementarios. El primero enfoca los activos naturales como condicionantes de las DTR. El segundo mira al impacto de las DTR en el medio natural y su capacidad de generar servicios ecosistémicos. Visto de esta forma, la cuestión ambiental aparece como componente esencial de las dinámicas territoriales donde las posibilidades que un territorio tiene para desarrollar procesos sostenibles de desarrollo humano dependen del capital natural y del potencial que este tiene para producir servicios ambientales. Al mismo tiempo, es la propia actividad humana la que modifica el capital natural y co-produce los servicios ecosistémicos. (Véase también MA 2005).

Como señalan, en territorios caracterizados por la expansiva presencia de industrias extractivas de hidrocarburos, los hidrocarburos como parte del capital natural son un factor que condiciona las dinámicas territoriales no sólo por su efecto en reconfigurar el territorio (Hinojosa *et al.* en este volumen) sino por sus otros efectos en redefinir el acceso, uso y gestión de otros recursos naturales (como agua y tierra) del cual depende el desarrollo de otras actividades productivas en el medio rural. Por otro lado, las transformaciones del capital natural producidas por la explotación de hidrocarburos y la creciente inversión en infraestructura pública que la acompaña (Chumacero 2010a) condicionan la provisión de servicios ecosistémicos y, con ello, el desarrollo de nuevas dinámicas territoriales.

24 Por ejemplo, los indígenas guaraníes de la TCO Itika Guasu han planteado comprar las tierras de los terceros que se encuentran dentro de la TCO. Los recursos financieros para ello saldrían de las regalías del gas. (Declaración del Capitán de la TCO Itika Guasu).

En la discusión sobre sostenibilidad un tema que aparece en el debate es el tipo de conocimiento que se usa para elaborar argumentos respecto de si las industrias extractivas pueden o no ser sustentables; a argumentos basados en conocimiento moderno (con uso de ciencia y tecnología) se oponen los que más bien usan conocimiento tradicional y popular (Hinojosa 2007). En el estudio de los efectos ambientales de las DTR en Tarija, Hinojosa y Hennermann (en este volumen) combinan elementos del Sistema de Evaluación de Ecosistemas (MA 2005) con los enfoques de estrategias de vida. Mediante el análisis de imágenes de satélite, se cuantificó el cambio ambiental “medible” originado por las DTR en los últimos 10 años y, en paralelo, mediante entrevistas a los actores de los territorios en estudio se captó su visión cualitativa sobre los cambios ambientales “percibidos” y los factores de conflictos socio-ambientales. Con ello los autores discuten la sostenibilidad socio-ambiental de la expansión de hidrocarburos y la gobernanza del capital natural.

De la evaluación cuantitativa de los cambios observados en las condiciones del medio ambiente a lo largo del período 2001-2008 sugieren que, ni la expansión de la explotación de hidrocarburos, ni las DTR que los acompañaron, han generado cambios que indiquen significativo deterioro ambiental o que muestren un nivel de mejora que satisfaga las expectativas del impacto esperado de las rentas gasíferas. En este sentido, se puede sugerir que la industria del gas puede ser ambientalmente sostenible y que la mejora del medio natural para la producción de servicios ecosistémicos depende más bien de cómo se use la renta del gas.

No obstante, también sugieren que la distribución de cambios en los espacios territoriales estudiados es bastante desigual y, que el cambio ha afectado más a aquellas zonas que ya estaban en condiciones de desventaja relativa, zonas potencialmente más concentradoras de poblaciones indígenas o de pequeños campesinos. Este efecto de desigualdad en la distribución geográfica de cambios en los factores que afectan la generación de servicios ecosistémicos, junto al nivel de conflicto por el acceso a capital natural y las rentas de los hidrocarburos, induce una conclusión “menos optimista” respecto de la sostenibilidad socio-ambiental de las estrategias de crecimiento basadas en rentas gasíferas y plantea como tema central la cuestión de gobernanza de los recursos naturales en dos aspectos fundamentales. Primero, para reafirmar la necesidad de conceptualizar el medio natural en un sentido amplio que incluya el enfoque de capital natural y servicios ecosistémicos, así como las relaciones sociales y de poder que determinan el uso, intercambio y la transformación de los activos naturales. Segundo, en las implicaciones de política que se pueden derivar se destaca la necesidad de considerar a los activos naturales y los servicios ecosistémicos como elementos que requieren

regulación social y estatal, así como de abordar el tema de derechos de propiedad sobre los activos naturales en forma más articulada a los proyectos territoriales que conducen a DTR inclusivas y sostenibles.

9. Organización del libro

Para presentar los hallazgos de esta investigación, este libro se organiza en nueve capítulos. Cada capítulo ha sido redactado de forma tal que pueda ser leído de forma separada de acuerdo a los intereses temáticos del lector. En esa medida, cada uno incluye una primera sección metodológica y de contexto específica que luego es seguida por una discusión a profundidad de los temas específicos abordados en la investigación. Las referencias de bibliografía, a las cuales se hacen referencia en cada capítulo, se encuentran agregadas al final del libro.

Este primer capítulo de *Introducción* explicita el enfoque metodológico, introduce los lineamientos del marco conceptual que guiaron nuestro análisis y sintetiza los principales hallazgos de la investigación. Para esto último, describimos el contexto en el cual se da la expansión de la industria extractiva en Bolivia y luego describimos las dinámicas territoriales que se observaron en Tarija, con especial énfasis en el chaco tarijeño. Seguido a ello analizamos el rol de los actores y coaliciones en las DTR y los procesos de construcción de territorio y exploramos la dimensión ambiental de las DTR a partir de una evaluación de su sostenibilidad.²⁵

El segundo capítulo, *Actores y coaliciones de poder en Villamontes y Entre Ríos: una lectura histórica y contemporánea* por Guido Cortez, aborda el tema de actores y alianzas y sus proyectos territoriales, desde una perspectiva histórica del origen y rol de cada grupo en las DTR de los municipios de Villamontes y Entre Ríos, en el chaco tarijeño. El capítulo destaca la influencia de las nuevas estructuras estatales y legislativas, creadas desde 2006, y el impacto que la redistribución de la renta hidrocarburífera tuvo en las estrategias políticas adoptadas por los actores sociales locales para llevar adelante sus proyectos de grupo y territoriales.

El tercer capítulo, *La formación de territorios asociada a la expansión de la industria del gas en Tarija* por Leonith Hinojosa, Juan Pablo Chumacero, Guido Cortez, Anthony Bebbington, Denise Humphrey Bebbington, analiza el proceso de construcción de territorios y la generación de identidades territoriales dentro de un marco de análisis que se centra en proyectos territoriales.

25 Una versión resumida de este capítulo introductorio se encuentra en Berdegué y Modrego (eds.), (en prensa).

El cuarto capítulo, *Tierra y dinámicas territoriales rurales en Villamontes y Entre Ríos* por Juan Pablo Chumacero, presenta una reflexión sobre la cuestión de los derechos de propiedad de la tierra, en relación con las DTR y la formación de territorios y aborda de forma específica el caso de los territorios de comunidades de origen que afecta a los pueblos indígenas del llano.

El quinto capítulo, *Las tensiones estado-indígenas debido a la expansión de la industria hidrocarburífera en el chaco boliviano*, por Denise Humphreys Bebbington, presenta una mirada profunda a pueblos indígenas del chaco tarijeño, su lucha por el control territorial de sus tierras y las tensiones emergentes debido a la vulneración de sus derechos durante la expansión de la industria de hidrocarburos.

El sexto capítulo, *Articulación entre la inversión pública y las coaliciones territoriales en Villamontes y Entre Ríos*, por Juan Pablo Chumacero, presenta una síntesis de la evolución de la inversión pública que se dio en el departamento de Tarija durante el período 2006-2010 como resultado del proceso de redistribución de los varios impuestos a los hidrocarburos y articula el efecto de este ingreso público al surgimiento de coaliciones territoriales y proyectos de desarrollo.

El séptimo capítulo, *Desafiando la maldición de los recursos en Tarija: pobreza y política social financiada por las rentas de hidrocarburos* por Leonith Hinojosa, analiza el efecto del incremento de las inversiones públicas e ingresos fiscales de los gobiernos departamental y municipales en el diseño de políticas sociales y de programas de lucha contra la pobreza.

El octavo capítulo, *Sostenibilidad ambiental y servicios ecosistémicos en contextos de expansión de industrias extractivas: el caso de las dinámicas territoriales rurales en Tarija-Bolivia* por Leonith Hinojosa y Karl Hennermann, aborda la dimensión ambiental de las DTR con una mirada a la sostenibilidad ambiental de las DTR bajo un enfoque de servicios ecosistémicos.

El noveno capítulo, *Conclusiones*, recoge los temas fundamentales que los casos estudiados enseñan y sugiere implicancias de política pública orientadas a apoyar a que las DTR que surgen dentro de un contexto de expansión de industrias extractivas de hidrocarburos sean inclusivas y sostenibles.